

EL OBSERVADOR

ELECTORAL

Guatemala, octubre 2003

Año 1, No. 4

Presentación

El proceso electoral 2003 se encuentra en su etapa final y por ello, esta cuarta entrega de “El Observador Electoral” hace un repaso de las principales candidaturas que se presentan en la competencia por alcanzar los distintos cargos de elección popular que están en disputa, incluyendo la Presidencia de la República.

Fundamentalmente retomamos el planteamiento que hiciéramos en el primer número de esta serie, a saber, que más que una lucha entre signos partidarios, las Elecciones Generales 2003 constituyen un escenario en donde se enfrentan distintas fracciones del capital, ubicadas particularmente en dos bloques con diversas ramificaciones cada uno de ellos. Como tal, esa lucha no sólo implica ganar correlación de fuerzas y ubicarse en los cargos disputados, sino va más allá de ello para expresarse como una lucha por la hegemonía del poder y de intereses entre bloques económicos y políticos, tengan éstos procedencia empresarial o militar.

Desde esta perspectiva entonces, el artículo devela que esta lucha no es nueva y se da a través del continuo reciclaje que practican no sólo las principales figuras que han protagonizado la vida política nacional en los últimos treinta años, sino también de muchas de las organizaciones políticas que hoy en la transición política aparecen remozadas en nombre y estructura.

Los personajes políticos que dominan las dirigencias partidarias, ya sea desde el mando central o entre bambalinas, no son novatos. Más bien, viejos zorros que van en busca de la supervivencia política o bien permanecer aferrados al poder, lo que les hace mantenerse en un continuo ir y venir en el tinglado político, de la mano de viejas y nuevas instancias partidarias que nacen y mueren tan rápido como surgen, fiel reflejo de estructuras partidarias ya caducas.

Pero la complejidad del desarrollo de la política guatemalteca no puede analizarse sólo a partir de ese libre transitar partidista. Necesariamente debe ir en dirección de explicar los bloques de poder enfrentados históricamente, en estas tres últimas décadas. Bloques a los cuales se les han unido y separado, de acuerdo con sus intereses, los políticos y los militares con mayor influencia.

Nuestra segunda entrega va de la mano con el anterior, y da continuidad a una línea de argumentación que se ha venido desarrollando a largo de todos los números de “El Observador Electoral” que se han publicado hasta ahora, esto es, el análisis del papel de la sociedad civil y de los partidos políticos como actores de la transición política guatemalteca y en el proceso electoral presente.

Desde esta perspectiva, “Entre la comunidad y el Estado: el rol de la sociedad civil y los partidos políticos en el proceso electoral y la transición democrática», examina procesos culturales y políticos que subyacen al proceso electoral y, mas generalmente, al proceso de transición democrática en Guatemala. En particular, este artículo destaca los mundos socioculturales, mundos diarios, a partir de los cuales los/las guatemaltecos/as, abordamos nuestros problemas más sentidos, y los amarres con las ofertas y los programas que las organizaciones partidarias nos ofrecen para solucionarlos.

El artículo argumenta que ha sido una característica fundamental de los procesos electorales en Guatemala, el querer apelar directamente al llamado «pueblo» y, de ese modo, pasar por alto y hasta trivializar el surgimiento de una sociedad civil y la necesidad de avanzar y profundizar en el proceso de transición democrática, precisamente porque esa trivialización y apelación a lo tradicional, constituye un valladar para lograr este último proceso.

Tres décadas después...

Viejas y nuevas oligarquías, redes militares e intelectuales orgánicas de la contrainsurgencia participan en las Elecciones Generales de 2003 3

Entre la comunidad y el Estado:

El rol de la sociedad civil y los partidos políticos en el proceso electoral y la transición democrática 21

EL OBSERVADOR ELECTORAL

Consejo Editorial

Fernando Solís

Raúl Cuellar

Claudia López

Marco Fonseca

“El Observador Electoral”
es una publicación producida
con la cooperación de:



Tres décadas después...

*Viejas y nuevas oligarquías, redes militares e intelectuales orgánicas de la contrainsurgencia participan en las Elecciones Generales de 2003**

I. Introducción

Si algo hay que destacar del proceso electoral 2003, es el continuo *reciclaje* político de las principales figuras que han protagonizado la vida política nacional en los últimos treinta años.

Los personajes políticos que dominan las dirigencias partidarias, ya sea desde el mando central o entre bambalinas, no son novatos. Más bien, viejos zorros ya sea en busca de supervivencia política o bien permanecer aferrados al poder, lo que les hace mantenerse en un continuo ir y venir en el tinglado político, de la mano de viejas y nuevas instancias partidarias que nacen y mueren tan rápido como surgen.

Fiel reflejo de una estructura partidaria ya caduca, incapaz de responder a las necesidades políticas que requieren los Estados modernos, estos personajes, incapaces de elaborar mínimamente un programa de gobierno, expresan el más abierto de los oportunismos políticos.

Con el afán de gobernar, estas figuras han hecho del Estado su botín, si no un instrumento que responda a los intereses económicos que les apoyan y financian desde los más oscuros rincones del país.

La vigencia de estos personajes en la vida política nacional sólo puede analizarse a partir de su continuo cambio de *ropaje* político, y sus alianzas con los bloques de poder que han gobernado formalmente o se han constituido en el poder detrás del trono, sea con los gobiernos militares o los electos en la transición política que tiene lugar en el país¹.

Pero el quehacer político para estas figuras ha trascendido esos límites, y muchos de ellos, los más afines a los poderes reales, han tenido la capacidad de ser artífices, si no colaboradores, de procesos de inestabilidad que conducen a nuevos momentos políticos, los cuales, por cierto, han caracterizado el largo e inconcluso proceso de transición política surgido en 1982.

Pero la complejidad del desarrollo de la política guatemalteca no puede analizarse sólo a partir de ese libre transitar partidista. Necesariamente debe ir en dirección de explicar los bloques de poder enfrentados históricamente, en estas tres últimas décadas. Bloques a los cuales se les han unido y separado, de acuerdo con sus intereses, los políticos y los militares con mayor influencia.

Tales bloques, si bien pueden traducirse en dos por cuestiones metodológicas, en la realidad están divididos. Esta división se expresa no sólo en la variada estructura partidaria, más por número que por razones ideológicas, sino además por los poderes económicos en ellos representados.

* Elaborado por Luis Solano, Economista por la Universidad de San Carlos e Investigador Social; y Fernando Solís, Economista por la Universidad de San Carlos, Investigador Social y Analista Político.

1 Para una caracterización general del proceso de transición política que se abre en 1982, que hemos denominado inconclusa y agotada, ver “Caracterización de las Elecciones Generales 2003”, en “El Observador Electoral No. 1”, enero de 2003. El reciente trabajo que la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO) publicara como suplemento en el diario *Prensa Libre*, retoma el análisis de la actual situación política y del proceso electoral desde este planteamiento de la transición agotada. Ver “Una Transición Agotada: mirando más allá de la coyuntura. Aporte para una construcción colectiva”. AVANCSO, 14 de septiembre de 2003.

II. Una dinámica de poder que va más allá de los signos partidarios

Los gobiernos militares de la década del 70 y la guerra contrainsurgente, posibilitaron el surgimiento de poderes económicos y políticos paralelos al poder económico real: la oligarquía. Sus alianzas, cerradas a veces y enfrentadas en otras, terminaron por tejer los dos bloques mencionados.

Tales bloques estuvieron representados en partidos políticos, surgidos para detentar el poder y consagrar los intereses políticos y económicos de quienes los sostenían: el Ejército y la oligarquía. Así, los gobiernos de los generales Manuel Arana Osorio, Kjell Eugenio Laugerud García y Fernando Romeo Lucas García, fueron expresión de pugnas y férreas luchas de poder, cuando no alianzas que apaciguaron los enfrentamientos, violentos en las peores de las veces.

La Central Aranista Organizada (CAO) y el Partido Institucional Democrático (PID), fueron los partidos de los militares en los años 70. Mientras el Partido Revolucionario (PR), surgido con propósitos distintos, fue cooptado por sectores oligarcas en esos años, y junto con el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), el partido de la oligarquía terrateniente, se constituyeron en los defensores del poder económico real².

Surgido al calor de la contrarrevolución de 1954, al igual que el MLN, el partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) buscó situarse entre ambos sectores y granjearse el apoyo popular, lo cual hubiera logrado en 1974, de no haberse producido el fraude electoral que evitó que el general Efraín Ríos Montt asumiera la Presidencia de la República.

Las pugnas entre el MLN y el PID-PR provocaron posteriores resquebrajamientos; incluso la CAO no fue la excepción. Así, la década del 80 da inicio con un MLN desgastado, la CAO que se pasará a llamar Central Auténtica Nacionalista (CAN), de la mano del terrateniente y arquitecto Gustavo Anzueto Vielman³; la aparición del Partido Nacional Renovador (PNR), con el exemenalista Alejandro Maldonado Aguirre a la cabeza⁴; el Frente Unido Nacionalista (FUN); al igual que el PID-PR, debilitados por los fraudes electorales, apostarán por convertirse

en los partidos políticos de los poderes en pugna.

Pero los golpes de Estado de 1982 y 1983 conducirán a nuevas reestructuraciones partidarias, y las viejas instancias se irán reacomodando, así como sus miembros más destacados.

Este es el caso del ex emelenista Álvaro Arzú, quien fuera el Director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) con el gobierno de Lucas García, y viera frustradas sus aspiraciones de convertirse en alcalde municipal de la capital con el golpe de Estado de 1982 apoyado por el entonces comité cívico Plan de Avanzada Nacional (PAN), empezará a apuntalarse en 1985 en la alcaldía capitalina, para luego ganar la Presidencia de la República en 1996, pero ya apoyado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN)

El PAN, no obstante, no expresaba los intereses de los poderes económicos reajustados en la década del 80. Incluso, se enfrentaba a varios de sus exponentes. Ese poder económico había apostado a otros, y lo había hecho mal. La DCG, primero en 1986, y luego el Movimiento de Acción Solidaria (MAS) en 1991, tras la sorpresiva derrota de la Unidad del Centro Nacional (UCN), que aglutinó a los emelenistas de mayor peso como Manuel Ayau.

Mientras tanto, el sector militar que se había beneficiado de la guerra y la corrupción de los gobiernos militares y de facto, veía en la alianza de partidos denominada Plataforma No-Venta, que aglutinaba al Frente Republicano Guatemalteco (FRG), al FUN y PID⁵, la fuerza para mantenerse en el poder político.

La oposición que se da en las máximas instancias legales y constitucionales del país a la candidatura presidencial del general retirado Efraín Ríos Montt, da al traste con las intenciones del sector militar de retornar al poder político, pese a contar con los apoyos de viejos políticos de la era de los gobiernos castrenses.

Los continuos fracasos para inscribir a Ríos Montt en 1990 y 1995, terminan apuntalando al actual mandatario Alfonso Portillo, quien pese a ser derrotado en las elecciones de 1995, se convertirá en el Presidente de la República en 1999.

2 El PR inclusive, llegó a conformar grupos de choque dentro de su estructura, tal como es el caso de los denominados "Centuriones". Inclusive, algunos de los intelectuales y cuadros que formaron parte de este grupo, participaron en el actual gobierno de Alfonso Portillo con el FRG. Ese es el caso, por ejemplo, de Víctor Hugo Godoy, quien fuera Ministro de Trabajo y Director de la Comisión Presidencial para la Defensa de los Derechos Humanos (COPREDEH), y actualmente asesor en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), junto a Oliverio García Rodas y Roderico Segura.

3 Gustavo Anzueto Vielman es más recordado por haber sido candidato presidencial en 1990 compitiendo por el partido Central Auténtica Nacionalista (CAN), fundada por el general Manuel Arana Osorio en 1970 con el nombre de Central Aranista Organizada (CAO), que por haber sido uno de los fundadores de la conservadora Comisión Nacional Agropecuaria (CONAGRO), similar de lo que en su momento fue la Unión Nacional Agropecuaria / UNAGRO, antecedente inmediato de lo que hoy constituye el CACIF. Anzueto Vielman es un terrateniente del oriente del país que en tiempos del conflicto armado, se le asoció con los escuadrones de la muerte que funcionaron desde el Estado como brazos de la contrainsurgencia. Retirado de la política, ha escrito recientemente el libro "Tiempo Perdido 1998" donde expone su visión sobre los Acuerdos de Paz. Como tal, Anzueto Vielman continúa siendo un fiel representante del pensamiento de ultra derecha y conservador, al mejor estilo del pensamiento agrario y terrateniente de finales del siglo XIX e inicios del XX.

4 Alejandro Maldonado Aguirre encabeza el listado de diputados por el Distrito Metropolitano que el Partido Unionista presenta para estas Elecciones Generales 2003.

5 Por cierto que el que fuera Secretario General vitalicio del PID en sus mejores tiempos, Oscar Rivas, fungió como Director de la Oficina de Servicio Civil (ONSEC) en el presente gobierno del FRG.

El FRG, ya alcanzado el poder político, empieza a buscar el coronamiento de viejos esfuerzos que sólo serán logrados cuando su líder y caudillo, Ríos Montt, ocupe la silla presidencial.

Pero en esa lucha sin cuartel librada por los poderes que se encuentran cogobernando con el eferregismo, también se esconde otra lucha: la de los poderes subterráneos gestados durante la guerra contrainsurgente que le abrió las puertas al crimen organizado, con militares de todas las gamas al frente.

De esto último se desprende un poder emergente que se implantará para empezarle a disputar los beneficios económicos que por mucho tiempo la oligarquía ha concentrado para sí. De igual manera, poderle disputar el poder político, que por años ha estado a su servicio.

Esa disputa por el poder político, pese a gestarse en los años 70, no alcanzará la cúspide sino hasta con el gobierno de Portillo. El bloque oligárquico (conservador y modernizante) será desplazado y sus intereses se verán afectados, al extremo que poderes económicos tradicionales que brindaron su apoyo a Portillo, se lo retirarán casi de inmediato⁶.

Como resultado, la lucha intestina de ambos bloques se manifestará públicamente en los enfrentamientos gobierno-empresarios.

El desplazamiento experimentado por el poder económico real de la esfera de poder político, le abrirá las puertas para participar más abiertamente en la campaña partidista, en un nuevo esfuerzo por retomar las riendas del gobierno.

Nuevos partidos políticos aparecerán, mientras las viejas instancias, o bien ya no resuelven las nuevas necesidades oligarcas, tal es el caso del PAN, o simplemente están liquidadas, como el caso de la DCG.

Una nueva estructura partidaria aparecerá, mientras el poder económico segmentado por diversos intereses, se fragmentará de acuerdo con los espacios y dirigentes que tales institutos políticos brindan.

Y entonces, repentinamente, se verá aparecer, algunos de “entre sus cenizas”, a una amplia variedad de viejos políticos y miembros de las familias más poderosas del país, ya sea participando como candidatos, o como respaldo económico, o simplemente como “poderes detrás del trono”.

Junto a ellos, un destacado número de militares retirados, distribuidos “casualmente” en casi todos los partidos. Tal participación no sería de importancia a no ser por el común denominador que los ata: haber dirigido, la mayoría, durante la época más dura de la contrainsurgencia, y aún en la negociación de los Acuerdos de Paz, la Inteligencia Militar del Ejército, y haber sido, paralelo, otros, comandantes de las principales bases militares en la época del conflicto y/o Ministros de la Defensa.

Su acercamiento a los partidos políticos sólo puede explicarse por el poder que ellos representan.

El manejo de información sensible les permite conocer y compartir debilidades y fortalezas de sus enemigos.

Pero a esta especie de ventaja comparativa y competitiva también se agregan dos hipótesis que plantean, una, un tipo de infiltración que permitiría a por lo menos un poderoso segmento militar, el control o al menos una poderosa presencia en el poder político; dos, no muy diferente que la anterior, apostar por cualquiera de los institutos políticos con más posibilidades de triunfo, pues consabido es que uno de ellos asumirá el poder el 14 enero de 2004, y de esa manera las puertas se abrirán a otros militares, gestándose así un nuevo círculo o poder paralelo.

Los análisis a nivel diplomático, incluso, han llegado a plantearse que los llamados poderes ocultos, en los cuales ha sustentado su fuerza el partido gobernante, están atados por hilos muy finos, los cuales se romperán tarde o temprano, para pasar a apoyar a los enemigos más encarnizados del eferregismo. Paradójicamente, se dice, un eferregismo encumbrado con Ríos Montt al frente, no es conveniente para por lo menos uno de los tres grupos de *poder tras bambalinas*, en donde las mafias y crimen organizado se disputan el control de sus negocios⁷.

6 Es un secreto a voces que el grupo empresarial Multiinversiones, propiedad de la alianza Gutiérrez-Bosch, apoyó en 1999 la candidatura de Portillo con recursos y diseminando dinero a través de varios medios de comunicación que, para ese proceso electoral, promovieron la imagen del ahora Presidente de la República, aunque no la del FRG como partido. Este apoyo, en lo que a los medios de comunicación se refiere, tuvo como uno de sus asideros, la relación de amistad que existía entre José Rubén Zamora, Director de elPeriódico, y Portillo, antes de que este gobernara, así como el hecho de que el principal cuadro del gobierno actual, el Ministro de Relaciones Exteriores, Edgar Gutiérrez, como se recordará, fue parte del grupo editorial de elPeriódico, en los albores de 1999. De hecho a Zamora y a Gutiérrez los une una relación de amistad de muchos años. Otro asidero es la relación de amistad que en algún momento existió entre Dionisio Gutiérrez y el Vicepresidente de la República, Francisco Reyes López. Debe recordarse, como ya lo dijimos anteriormente, Reyes López fue miembro de la directiva y hasta Presidente del CACIF.

7 Esos negocios en disputa abarcan por lo menos, nueve áreas o nueve puntos estratégicos dentro y fuera de la administración pública: narcotráfico en sus distintas manifestaciones como lavado, control de puntos de trasiego y redes de ilícitos vinculadas o ramificadas en puertos, el aeropuerto, etc.; contrabando y control de las aduanas del país; robo de madera, tanto en la región de la Franja Transversal del Norte (FTN), Petén, como la parte oriental del país; tráfico de ilegales y corrupción en las instancias migratorias; control del Ministerio de Gobernación y de su presupuesto; control del Estado Mayor Presidencial (EMP) y de la seguridad que rodea a los mandatarios, así como de Inteligencia del Ejército; relación con los grupos de crimen organizado que controla las cárceles del país, así como con el robo de carros y secuestro de personas. Los cinco grupos de militares en retiro y de alta que tienen aún mucha presencia dentro del Ejército y fuera de él, así como en la administración pública, y que ahora aparecen diseminados, tanto en el partido oficial como en otros que participan en las actuales elecciones, forman parte de esa disputa por el control de estas áreas y los espacios donde tienen lugar.

III. De las fuerzas políticas y sus figuras

De esa nueva reestructuración partidaria, cuyos orígenes se remontan al Movimiento de Liberación de Nacional (MLN) y los partidos que dominaron la palestra política hace tres décadas, se puede observar ahora como reaparecen viejas figuras en esa disputa entre bloques de poder que, en Guatemala, parece ser eterna. Como ejemplos, veamos como se manifiestan en el actual proceso electoral.

El Frente Republicano Guatemalteco (FRG)

El partido oficial, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), es el que más militares retirados aglutina dentro de sus filas.

Desde su integración a finales de la década del 80, el FRG se distinguió por incorporar segmentos de militares y personalidades políticas ligadas a aquellos partidos políticos que ejercieron el protagonismo en los años 70 y 80. En particular, de aquellos partidos que reflejaban los intereses de los militares que gobernaron en esos años: el Partido Institucional Democrático (PID) y el Frente Unido Nacional (FUN), los cuales, incluso, apoyaron el golpe de Estado de 1982.

Ambos partidos inclusive, formaron parte, junto con el FRG, de la alianza denominada Plataforma No Venta, que participó en las Elecciones Generales de 1990.

La principal figura política pública del FRG, el general retirado Efraín Ríos Montt, se convirtió en una especie de caudillo para sus miles de seguidores. No obstante sus rasgos mesiánicos, su militancia evangélica y su discurso que apela a los valores tradicionales y moralistas, se asocia al estigma de la violencia política ejercida por el Ejército y los aparatos paramilitares de los años 70 y 80. Incluso, su trayectoria política arrastra los vínculos ejercidos con las acciones conspirativas de la dictadura militar Argentina, en la contrainsurgencia desatada en Centroamérica y el Cono Sur. Un caso paradigmático de esas relaciones secretas fue la asesoría prestada a Ríos Montt por el capitán argentino Jorge Lynch, un experto en desinformación y comunicaciones, quien en 1980 fue asesor especial del ministro del Interior de Bolivia, coronel Luis Arce Gómez, acusado de narcotraficante.

Junto a Ríos Montt hay una vasta gama de militares retirados, quienes, al igual que el general retirado, tienen una larga trayectoria con raíces en la contrainsurgencia.

Uno de estos es el general retirado, Víctor Manuel Argueta Villalta, quien es familiar de la esposa de Ríos Montt, Teresa Sosa de Ríos Montt. Por cierto, ella es hermana de Manuel

Sosa Ávila, general fallecido a quien se le vinculó con los escuadrones de la muerte en los años 60, cuando ejerció los cargos de Viceministro de Contrainsurgencia, Director de la entonces Policía Nacional (PN) y Ministro de Gobernación⁸. El fue asesinado en 1985, en medio de férreas disputas de poder en la cúpula militar. La esposa de Ríos Montt también es hermana de quien fuera candidato presidencial del MLN en 1990, el coronel también retirado, Luis Ernesto Sosa Ávila, por el desaparecido partido Alianza Reconciliadora Nacional (ARENA)⁹.

Argueta Villalta, además de ser un alto dirigente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), se le recuerda como uno de los jóvenes asesores de Ríos Montt tras el golpe de Estado de 1982. Actualmente asesora a la Presidencia del Congreso y a la Vicepresidencia. En 1982 fue nombrado como jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), cargo que ocupó durante todo el gobierno de facto de Ríos Montt. Previo al golpe, Argueta Villalta laboró en el Departamento de Acciones Psicológicas (D3) del Ejército, entre 1977 y 1981, donde llegó a ejercer el cargo de Subjefe.

Otro militar retirado es el general José Mauricio Rodríguez Sánchez, Director de Inteligencia Militar con el gobierno de facto de Ríos Montt, y quien ahora se desempeña como Asesor del Presidente de la República, Alfonso Portillo.

Igualmente se encuentra el general retirado Oscar Alfredo Cruz López, quien manejaría recursos del Ejército para la campaña presidencial del FRG. Según un medio escrito de comunicación local¹⁰, Cruz López ha estado vinculado a las principales redes de narcotráfico surgidas desde el gobierno de Vinicio Cerezo.

Entre las principales figuras castrenses que militan en el FRG se puede mencionar al general Luis Felipe Miranda Trejo, quien fue electo diputado para el período 2000-2004, y que actualmente se desempeña como Director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), una institución que históricamente ha sido permeada por la inteligencia militar. A Miranda Trejo se le identifica como el “cerebro” que creó las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) a principios de los 80, junto con otras fuentes que señalan al general retirado Benedicto Lucas García, ex Ministro de la Defensa y hermano del también general retirado Romeo Lucas García, quien gobernó al país en 1978-1982.

Miranda Trejo fue, en 1981, Jefe del Centro de Adiestramiento y Operaciones Especiales Kaibil y desempeñó puestos de oficial de inteligencia en varios comandos del país entre 1979 y 1983, así como ejerció las comandancias de varias zonas militares entre 1990 y 1995.

8 Ver Informe REMHI, Tomo III.

9 Ver “Aspectos de la Organización Electoral de Guatemala”. Tribunal Supremo Electoral (TSE). Embajada de Suecia y MINUGUA, 1998.

10 Ver diario *elPeriódico* del 9 de agosto de 2003.

También debe citarse al diputado Byron Barrientos.

Mayor de reservas retirado, Barrientos fue un oficial de inteligencia militar en los años 70 y 80, los años más duros de la represión política, y participó en la liquidación de reductos urbanos de la guerrilla. Se le señala de haber participado en capturas ilegales, interrogatorios a base de torturas físicas y psicológicas, amenazas, intimidaciones y ejecuciones extrajudiciales. Barrientos fue dado de baja en 1989 por participar en un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Vinicio Cerezo. Fue Ministro de Gobernación hasta el año 2001, cuando dimitió del cargo bajo acusaciones de corrupción y desfalco de más de Q. 100 millones, en un caso que se encuentra estancado en los tribunales de justicia. Ha sido diputado del FRG desde 1996.

Otra figura eferregistra es el diputado y militar retirado, Juan Santa Cruz, oficial de inteligencia a quien se le responsabiliza de organizar grupos paramilitares en los años 80, y participar en masacres en las Verapaces. Se le indica de haber participado recientemente, en la organización y dirección de las movilizaciones de supuestos militantes del FRG que tuvieron lugar el 24 y 25 de julio del presente año, para protestar en ese momento por la no inscripción de Ríos Montt como el candidato a la Presidencia de la República por parte del FRG, para estas Elecciones Generales 2003.

Otro grupo de militares retirados no identificados como eferregistas pero si cercanos a Portillo, es el que conforma uno que ha sido señalado de ser parte de los cinco grupos en que estaría dividido el crimen organizado.

Al mando del general retirado Luis Francisco Ortega Menaldo, este grupo se ha caracterizado por los señalamientos en su contra, de controlar el narcotráfico, y que con el apoyo de varios oficiales militares de alta, constituir uno de los poderes de la mafia del país.

Ortega Menaldo fue Director de Inteligencia del Ejército durante todo el gobierno de Vinicio Cerezo. Previamente, como oficial de inteligencia, trabajó en una oficina paralela al Ministro de Finanzas Públicas del gobierno de Lucas García (1978-1982), desde donde habría tejido una red de negocios ilícitos que ahora comanda. Sería el heredero de los poderes que en su momento tuvo el general retirado y ex Presidente de la República, Carlos Manuel Arana Osorio, en parte por ser su yerno, es decir, estar Ortega Menaldo casado con la hija de Arana Osorio, Patricia Arana España.

Además, es señalado de participar en violaciones a los derechos humanos, incluyendo el crimen de la antropóloga Myrna Mack,

así como se le vincula por su cercanía con finqueros de Izabal, a quienes se les atribuye haber participado con la represión institucionalizada en los años 70 y 80.

Junto a Ortega Menaldo se encuentran, el mayor retirado Jacobo Salán Sánchez, quien fuera un oficial de Contrainteligencia en la década del 80 y quien desempeñó el cargo de Jefe de Negociado de Contrainteligencia del gobierno de Cerezo. Fue jefe de seguridad de Portillo, cargo al cual renunció por presiones políticas. Sin embargo, sigue siendo hombre de confianza del mandatario.

A este grupo se asocia el mayor retirado, Napoleón Rojas Méndez, especializado en contrainteligencia.

A este grupo se sumaría Juan Callejas y Callejas, general retirado y quien también fuera Jefe del EMP, Director de aduanas y actualmente dueño de una de las más grandes empresas de seguridad privada. A Callejas se le ha vinculado con la red de contrabando cuya cabeza más visible fue Alfredo Moreno, así como también con dirigir a grupos de ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).

Todos estos militares pertenecieron a *La Cofradía*, y están siendo investigados desde el 2002, a raíz de exigencias de la Embajada de Estados Unidos en el país¹¹, y en un contexto en el que altos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense, señalaron al gobierno de Portillo de tener vínculos con el crimen organizado y de contar con pocos logros en las incautaciones de droga. Guatemala fue sacada durante un año del proceso de “certificación”, la política de cooperación de Estados Unidos a varios países latinoamericanos, relacionada con la lucha contra el narcotráfico, a condición de volver a ser incluida si se obtenían “logros” en la lucha contra el narcotráfico y se daban muestras de investigar a los grupos de crimen organizado incrustados en la estructura del Estado.

La alianza del Partido Desarrollo Integral Auténtico (DIA) y el Partido Libertador Progresista (PLP).

Su candidato presidencial, Eduardo Suger Cofiño, es un destacado físico y matemático que fuera fundador de la Universidad Galileo, de relativa reciente creación, y que se encuentra contigua a la Universidad Francisco Marroquín (UFM).

En sus orígenes, la Universidad Galileo no era más que la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación (FISICC) de la UFM, de la cual Suger Cofiño era decano.

¹¹ Esta doble moral que caracteriza la política exterior de Estados Unidos, se evidencia a partir de que no se duda que uno de los condicionamientos para “recertificar” haya sido la investigación de Ortega Menaldo, cuando varias fuentes señalan que éste trabajó para la Central de Inteligencia Americana (CIA), cargo desde el cual empezó a controlar redes de narcotráfico en la parte sur del país.

Tanto la Universidad Galileo como la UFM han trabajado conjuntamente con el Centro de Estudios Militares del Ejército (CEM), en la formación académica de militares.

Suger Cofiño es un coronel asimilado del Ejército, amigo y compañero de enseñanza del general retirado Marco Tulio Espinosa¹², quien fuera, primero, Jefe del EMP y, después, Ministro de la Defensa, ambos durante el gobierno de Alvaro Arzú, y que ahora se encuentra militando en uno de los partidos que conforman la Gran Alianza Nacional (GANAN) que postula a Oscar Berger.

En 1986, durante el gobierno de Vinicio Cerezo, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alejandro Gramajo, delegó en Espinosa la responsabilidad de introducir los sistemas de cómputo de la Dirección de Logística (D4) del Estado Mayor de la Defensa (EMD). Al poco tiempo, Espinosa, con ayuda de Eduardo Suger Cofiño, moderniza los controles administrativos del Ministerio de la Defensa¹³.

“...La Sección Técnica se sirve de equipos sofisticados para el espionaje y la obtención de información. El manejo de dicho equipo requiere de personal especializado formado por los mismos servicios de inteligencia o reclutado en universidades, bancos y corporaciones”¹⁴.

Según la revista *Crónica* ya citada, Eduardo Suger Cofiño fue reclutado para establecer un control computarizado de la población por el entonces Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Marco Tulio Espinoza, por medio de una invitación para organizar el personal administrativo del Ministerio de la Defensa.

Mientras desempeñaba el cargo de Director de Minería e Hidrocarburos, Espinosa, quien también es ingeniero petrolero, fue llamado por la UFM para impartir cátedras de física y matemática *“Suger ha invitado a Espinosa como catedrático de matemáticas avanzadas en la UFM”*, apunta el informe de REMHI ya señalado.

Junto a Suger Cofiño se encuentra el Secretario General vitalicio del PLP, Acisclo Valladares Molina Aycinena, quien proviene de una familia con raigambre política y económica de varios siglos atrás. Acisclo, como más se le conoce, está casado con Raquel Urruela, miembro de la poderosa y oligárquica familia Urruela Kong, con ramificaciones en la industria de los jabones. Fue fundador de las juventudes del partido de extrema derecha, Movimiento de Liberación Nacional (MLN), cuyo máximo dirigente fue Mario Sandoval Alarcón, recientemente fallecido y señalado de ser el fundador de los escuadrones de la muerte.

La hermana de Acisclo, Lucía Valladares Aycinena, es la esposa de Armando Sandoval Alarcón, hermano de Mario, y también fundador del MLN. Acisclo ha sido candidato a alcalde, fue Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público (MP) con los gobiernos de Serrano Elías, Ramiro de León Carpio y Arzú. Durante el gobierno de Portillo también ha ejercido el cargo de Embajador de Guatemala ante el Vaticano, en parte por sus estudios de derecho canónico y porque su padre ostentó el mismo cargo. En 1995 y 1999 fue candidato a la Presidencia de la República por el PLP. Ha estudiado Derecho y Economía Política en la Universidad de Salamanca, y se ha especializado en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia Gregoriana.

Con el DIA también se encuentra encabezando listado de diputados para el Distrito Metropolitano, el coronel retirado Ricardo Méndez Ruíz durante el gobierno de Cerezo Arévalo, quien fuera Director de la desaparecida Policía Nacional (PN).

La DCG y su constante indefinición ideológica.

Una de las transformaciones más importantes experimentadas fue la del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca (PDCG). Su viraje a personalidades ideológicamente opuestas le valió el señalamiento de buscar únicamente su sobrevivencia política. Hasta hace poco apegado al pensamiento socialcristiano, dio un brinco sorpresivo aliándose con empresarios e ideólogos neoliberales.

El hasta hace poco candidato presidencial, Ricardo Bueso, es un buen ejemplo de ello. Empresario con doble nacionalidad guatemalteca-estadounidense. Compró durante el gobierno del PAN, en una negociación promovida por cuadros de este partido, la entonces Empresa de Telecomunicaciones (GUATEL), privatizándola con el nombre de Telgua. Fundó la empresa Luca S.A. con la cual adquirió Guatel, ayudado por un grupo de empresarios guatemaltecos y hondureños. Está vinculado al Banco Americano y la Financiera de Inversiones (FISA), las cuales financiaron la compra de Guatel. Se le vincula a negocios con cubanos-americanos en Florida.

Mientras tanto, al Secretario General de la DC y actual diputado, Vinicio Cerezo, se le ha vinculado con el grupo de los Campollo Codina (azúcar-ingenio Madre Tierra-, finanzas), en el negocio del petróleo y la petrolera Compañía Petrolera del Atlántico, en Izabal, al igual que su hijo.

En el caso de Bueso, es un fiel seguidor del pensamiento neoliberal. En parte esa sería la razón por la que junto a él llegó

¹² Espinosa es uno de los inversionistas de la Basic Resources Company, y a él se atribuye, durante su paso por el EMP, haber instalado dentro de esta estructura, un “Comando Antisecuestros”. Durante este período, estando él al mando del EMP tuvo lugar el caso del asesinato de Sas Rompich.

¹³ Ver Revista *Crónica* del 30 de mayo de 1997.

¹⁴ Ver *Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI)*, Tomo II. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).

a la DCG, uno de los máximos ideólogos del neoliberalismo en Guatemala, Manuel Ayau Cordón¹⁵.

Ayau, aunque no es claro el cargo que ocupa dentro de la DCG, fue fundador de la Universidad Francisco Marroquín, es ingeniero estudiado en Estados Unidos y montó, junto con su esposa, Olga García, la empresa de gases industriales Fabrigás. Está vinculado al negocio de pisos cerámicos y a la electricidad, negocio último en donde a través de Fabrigás, ha construido algunas hidroeléctricas como la de Río Bobos y la del Río Las Vacas.

Ayau fue diputado por el MLN durante el gobierno de Arana Osorio (1970 - 1974) y seguidor del MLN hasta 1990, cuando ya en decadencia, el partido se resquebraja. Ayau entonces, en medio de pugnas con Mario Sandoval Alarcón, se traslada a la desaparecida Unión del Centro Nacional (UCN), y se convierte, en 1990, en el candidato a Vicepresidente de la República, junto a Jorge Carpio Nicolle, el candidato a la Presidencia de la República por ese partido¹⁶.

Ayau también fue el Presidente de la Comisión Gubernamental de Privatización y Desmonopolización en 1994, con el gobierno de transición de De León Carpio. También ha sido uno de los miembros más reconocidos de la otrora poderosa Asociación de Amigos del País (AAP), la cual influyó de sobremanera la vida política nacional desde dos siglos atrás y, en particular, hace treinta años, durante las décadas del 70 y 80.

Ayau también ha sido uno de los directores y accionista de la empresa petrolera Basic Resources. Junto con Armando de la Torre, ideólogo y académico de la Universidad Francisco Marroquín, fundaron el Grupo Pléyades o Pleyades Global, desde donde influyen en los medios comunicación a través de sus integrantes, todos columnistas de prensa como Estuardo Zapeta, Marta Yolanda Díaz Durán, Jorge Jacobs, Federico Bauer, Armando de la Torre, y hasta hace poco Manuel Ayau¹⁷.

El también hasta hace poco candidato a Vicepresidente de la República, Estuardo Cuestas Morales, es un abogado muy vinculado al deporte. Sin embargo, entre sus principales antecedentes se encuentra el haber sido Ministro de Cultura y Deportes del gobierno de Arzú, en 1999. Igualmente, ha sido Presidente de la Fundación Granai & Townson (G & T). Tanto

Bueso como Cuestas Morales, pese a que dijeron que no renunciarían al partido, lo hicieron públicamente pocos días después de renunciar a la candidatura.

Cabe recordar que la DCG fue inicialmente apoyada por el MLN, cuando se fundó a mediados de los años 50, poco tiempo después de la contrarrevolución que derrocó a Jacobo Arbenz. Quizá eso explique, en parte, el porqué el viejo dirigente del MLN, Leonel Sisniega Otero y, anteriormente a este partido y después del Partido de Unificación Anticomunista (PUA), se estaría involucrando con la DCG. Curiosamente, la DCG, en los años 70 y 80, se volvió blanco de los escuadrones de la muerte, organizados en parte por la ultraderecha. En particular, cuando lanzó como candidato presidencial al general Efraín Ríos Montt, en 1974.

Asimismo, han hecho parte del equipo democristiano: Julio Ligorria (asesor de imagen del hasta hace poco candidato presidencial Ricardo Bueso) y el teniente coronel retirado Mauricio López Bonilla. Este último, uno de los oficiales jóvenes que respaldó el golpe de Estado en 1982, y asesor de Ríos Montt durante su gobierno de facto. Va como candidato a diputado por el Listado Nacional.

Según el mandatario Portillo, un movimiento desestabilizador contra su gobierno fue gestado por ambos, de acuerdo a una denuncia presentada a la prensa internacional: *“fue una conspiración bien orquestada (...). La información que tengo es que quien organizó todo esto es Julio Ligorria y Mauricio López Bonilla”*, ambos socios en INTERIMAGE, una empresa de asesoría política internacional. Portillo denunció que Ligorria y López formaron con otros empresarios, el “Movimiento Cívico por Guatemala” para recabar firmas y pedirle la renuncia, y aseguró que *“por cada firma el CACIF pagaba 25 centavos de quetzal (unos 0,03 de dólar)”*¹⁸.

También es parte del equipo democristiano Julio Rivera Clavería, quien se desempeñó como Viceministro de Gobernación durante el gobierno de Cerezo. Igualmente, está el abogado y notario Gustavo Fratti; Miguel Balsells, quien ha sido Presidente de la Gremial de Casas de Bolsa y vinculado a la Federación Centroamericana, Panamá y El Caribe de Puestos de Bolsa (FECABOLSA). A ellos se suma el cafetalero Roberto Bueso, hermano de Ricardo Bueso.

15 Ver columna de Haroldo Shetemul en diario *Prensa Libre* del 15 de junio de 2003.

16 Cómo se recordará, Carpio Nicolle fue dueño y Director del desaparecido diario *El Gráfico*, y fue asesinado en 1994 durante el gobierno de su primo y ex Procurador de Derechos Humanos (PDH), Ramiro de León Carpio, en el convulso y violento período que se generó tras el rompimiento constitucional por parte de Jorge Serrano Elías en mayo de 1993. Durante este período también fue asesinado el entonces Presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Epaminondas González. Ambos crímenes nunca fueron aclarados.

Los pasajes y reacomodos que se generaron entre militares en activo y empresarios que llevó al retorno a la Constitucionalidad en 1993, están contados en el libro *“Imponiendo la Democracia”* de Rachel Macleary, Editorial Artemis y Edinter, Guatemala 1998.

Por cierto que en el caso de Ramiro de León Carpio, también militó en las filas del MLN y fue electo diputado con el actual partido gobernante, Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Murió en 2002.

17 Todos en los diarios *Prensa Libre* y *Siglo Veintiuno* y, en el caso de Zapeta, Díaz Durán y Jacobs, en la radio también con el Programa Milenio 3, transmitido en Emisoras Unidas.

18 AFP, 9 de junio 2002.

Uno de los personajes más importantes que está participando con la DCG, según lo dio a conocer Ricardo Bueso cuando aún era candidato presidencial de este partido, es Rolando Paiz Maselli. Este último es un ingeniero vinculado a la Cámara Guatemalteca de la Construcción y dueño de la fábrica de ladrillos INMACO. Fue Director del Comité de Reconstrucción Nacional (CNR) con el gobierno de Cerezo, en gran parte por sus conexiones con militares y por su involucramiento directo en el diseño del programa de las aldeas modelo cuando trabajó para la Dirección de Asuntos Civiles (D-5), o más conocida como la S-5. Esas “aldeas” fueron producto de la contrainsurgencia de principios de los 80.

En la lista de asesores de Bueso en temas específicos aparecieron, en su momento, si Bueso ganaba el gobierno con la DCG: en Educación, el académico y Director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la UFM, Armando de la Torre; en Comunicaciones y Obras Públicas, Roberto Castañeda, quien ha sido Presidente de la Cámara del Agro y Presidente del CACIF; en Salud, Estuardo Ligorria; y el periodista Estuardo Zapeta fungía como asesor personal de Bueso.

Según Mauricio López Bonilla, el hasta hace poco Jefe de Campaña de Bueso, alguna de estas personas podrían integrar el Gabinete de Gobierno si gana la DCG.

También se postula como candidato a diputado al general retirado Héctor Alejandro Gramajo, Jefe de Estado Mayor de la Defensa y Ministro de la Defensa durante el gobierno de Cerezo (1986-1990). Fue el cerebro de la Doctrina de Estabilidad Nacional. Igualmente, fue también candidato presidencial del FUN en 1995. Tras el golpe de Estado en 1982, que llevó al poder a Ríos Montt, Gramajo fue nombrado subjefe del Estado Mayor General del Ejército. Mientras que luego del golpe de Estado que derribó a Ríos Montt, en agosto de 1983 e instauró al general Oscar Humberto Mejía Víctores, a Gramajo se le nombró como comandante del estratégico Cuartel General, o Zona Militar No. 1.

La DCG ha proclamado también como candidatos a diputados por el listado nacional y metropolitano a Vinicio Cerezo Arévalo y Carmen Rosa de León Escibano. Esta última, hija de René de León Schlotter, fundador de la DCG en los 50, y hermana de René de León Escibano, otro candidato a diputado, Secretario de la Secretaría de Planificación y Programación (SEGEPLAN) durante el actual gobierno del FRG, y posteriormente uno de los interventores en el caso de los bancos gemelos, propiedad de Francisco Alvarado Mackdonald, uno de los financistas de la campaña electoral de Portillo.

Además, conforman el listado nacional, Julio Rivera Clavería y Mauricio López Bonilla. A De León le siguen en el listado metropolitano, entre otros, Walter del Cid, columnista del diario La Hora. También se encuentra como candidato a diputado, Carlos González Quezada, quien participó como candidato presidencial por los partidos Movimiento Patriótico Libertad

(MPL) y el Partido de Conciliación Nacional (PCN), en 1995, y fue diputado de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) entre 1984 y 1985 por el Partido Nacional Renovador (PNR) fundado en 1981 por Alejandro Maldonado Aguirre, quien militó en el partido de extrema derecha MLN. En 1985, González Quezada se escindió del PNR y pasó a apoyar a la DCG.

Otros personajes con la DCG son Flor de María de Solís, ex candidata a la Presidencia por Alianza Reconciliadora Nacional (ARENA), en 1999 y Julio Caballeros Seigné, ex director de la desaparecida y reciclada Policía Nacional (PN) durante el gobierno de Cerezo, y famoso en el contexto del caso de la *Panel Blanca*.

Finalmente, aparecen Marta Yolanda Díaz-Durán, miembro de la poderosa familia Díaz Durán, Jorge Jacobs y Alfred Kaldschmidt, vinculado al mundo de las ONG, particularmente como Directivo de la Asociación de Instituciones de Desarrollo (ASINDES), y quien fuera un alto funcionario de FUNDABI, una ONG vinculada con la Iglesia del Verbo, de Efraín Ríos Montt, y que contribuyó con la contrainsurgencia durante ese gobierno de facto, así como propietario de Radio Infinita.

Tras la renuncia de Bueso a la candidatura presidencial, se nominó al empresario y dirigente deportivo Roberto Pirri Cruz, quien era el candidato a la alcaldía capitalina por la UNE. Pirri ostentó el cargo durante 24 horas, y posteriormente fue designado en Asamblea General Extraordinaria celebrada el 31 de agosto, Jacobo Arbenz Vilanova.

En su editorial del 1 de septiembre publicado en el diario **La Hora**, Clemente Marroquín señaló al respecto de este travestismo de la DCG: *“Ayer Vinicio Cerezo, Secretario General de la Democracia Cristiana, no sólo postuló a Jacobo Arbenz Vilanova como candidato presidencial de su partido, sino que además despedazó a Ricardo Bueso, quien había sido postulado ‘por las bases’ siguiendo las indicaciones del mismo Cerezo, que mantuvo largas jornadas de negociación con el comprador de la empresa de telecomunicaciones en el oscuro proceso de privatización. Si alguien no puede quejarse por haber sido sorprendido es el mismo ex presidente de la República, licenciado Vinicio Cerezo, puesto que tiene suficiente colmillo político como para entender de qué se trataba el proyecto de Bueso, que no consistía sino en la idea de trasladar su experiencia en los negocios a la actividad política para comprar un partido como lo hizo con Telgua. Pero el caso es que Democracia Cristiana, que podía considerarse como el último de los partidos que respondían a un fuerte cimiento ideológico, ha demostrado que es ya apenas un vehículo para garantizarle al mismo Cerezo, y si acaso a alguno de sus más íntimos allegados, alguna posición en el Parlamento. Ese tránsito de Bueso, a Pirri Cruz y luego a Jacobo Arbenz, como algunos llaman al cachorro del recordado presidente de la Revolución, es síntoma de la más absoluta inconsistencia ideológica y reflejo de lo que realmente le importa a la dirigencia partidaria. En efecto, cuando se postuló a Bueso,*

fue evidente para muchos que la Democracia Cristiana estaba encontrando solución a sus problemas, puesto que con la inyección de recursos que podría hacer el candidato para invertir de esa forma sus ganancias en la compra de la telefónica, garantizaba presencia suficiente para lograr al menos meter algunos diputados. De hecho, la candidatura de Bueso era totalmente inviable por tener una cola más larga que la de un barrilete, debido a esa negociación que expertos internacionales no vacilan en calificar como uno de los más turbios procesos de privatización del continente americano, pero el dinerito que le quedó al empresario como resultado del negocio estaba para ser gastado a manos llenas. Personas allegadas al efímero candidato dicen que se gastó la bicoca de 4.2 millones de dólares en el esfuerzo por convertirse en Presidente, y eso sin contar lo que le metió en su momento al DIA, primer partido que quiso comprar. Por ello las palabras tan fuertes utilizadas por Cerezo para juzgar a Bueso no parecen justificarse, porque nadie puede pensar que fue 'sorprendido' por el grupito de empresarios que se acercaron al partido. La decisión de impulsar una plataforma cuya base ideológica era nada más y nada menos que la Liga Pro Patria, fue adoptada de manera racional y madura por Cerezo, y hubiera seguido en ella de no ser porque el candidato se dio cuenta que era imposible que pudiera ganar; que no es lo mismo comprar una telefónica que ganar la Presidencia de la República”.

La alianza entre la UD y el MPV.

Esa amplia gama de intereses e ideologías en la DCG también se observa, aunque en menor medida, en la alianza que agrupaba a la Unión Democrática (UD), Movimiento Principios y Valores (MPV) y a Unión Nacional (UN), denominada “Unión por el Bien de Guatemala”.

El binomio presidencial estaba integrado hasta hace poco por Rodolfo Paiz Andrade de la UD, y Juan Francisco Bianchi Castillo, del MPV, ambos, como era de suponerse, Secretarios Generales de ambas agrupaciones.

Por la UN su secretario general Jorge Canale Nanne, quien militó en las filas de la desaparecida UCN y fue parlamentario centroamericano. Canale Nanne fundó el desaparecido Partido Nacional Renovador (PNR), junto con el ex emelenista Alejandro Maldonado Aguirre.

Esta alianza se deshizo cuando Paiz Andrade anunció su renuncia a la candidatura presidencial de UD para apoyar la fórmula de Berger y Stein, candidatos de la GANA. De esa cuenta, la UD sólo presentará candidatos a diputaciones y alcaldías. En el caso del MPV, se retiró de la contienda y no presentará candidatos a ningún cargo, debido a que no constituye partido político legalmente inscrito, sino que aún tiene la

categoría de comité pro formación. Sin embargo, se infiere que apoyará a la UD.

En el caso de la UN, designó como su candidato presidencial al médico Francisco Arredondo, quien fuera hace unos meses candidato vicepresidencial de la UNE por un corto tiempo. Lleva como compañero de fórmula a Canale Nanne, Secretario General de este colectivo.

En cuanto a Paiz Andrade, fue Ministro de Finanzas Públicas del gobierno demócrata cristiano de Vinicio Cerezo, partido al que se vinculó desde 1984. Es uno de los magnates de las cadenas de supermercados e hipermercados Paiz a través de la corporación “La Fragua”. Es graduado en Harvard como economista, y como ingeniero de la USAC, ha impartido cursos en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), con sede en Nicaragua, y ha sido Presidente de la Asociación de Gerentes de Guatemala.

Mientras tanto, Juan Francisco Bianchi Castillo, fue Secretario de Relaciones Públicas de la Presidencia durante el gobierno de facto de Ríos Montt. El ámbito empresarial en que se desenvuelve es la construcción y la publicidad. Durante ese cargo gubernamental dio declaraciones al New York Times, el cual le citó “*que para acabar con la subversion se debe matar a los indios en Guatemala por estar inmiscuidos en la guerrilla*”. Bianchi negó esas declaraciones pero aclaró que lo que él dijo fue “*algunos aborígenes fueron entrenados por la guerrilla y cuando se registran enfrentamientos entre ellos y las patrullas militares, obviamente mueren algunos facciosos de la raza indígena*”¹⁹.

Fue candidato presidencial por Acción Reconciliadora Democrática (ARDE) en 1999, partido heredero del MAS, tras su derrumbe con el autogolpe de Serrano Elías en 1993. Bianchi pertenece a la secta fundamentalista protestante Shaddai, en la cual ha ocupado cargos de relevancia. Tuvo un papel fundamental en la organización de los llamados Polos de Desarrollo y las Aldeas Modelo, durante la guerra contrainsurgente con el gobierno de Ríos Montt.

Con el Movimiento Principios y Valores (MPV) también se encuentra el general retirado Julio Balconi Turcios, Ministro de la Defensa con el gobierno de Arzú. Fue Subdirector de Inteligencia en 1984, y Subjefe de Estado Mayor de la Defensa con el gobierno de Ramiro de León Carpio. Igualmente, integró la Comisión de Paz que negoció los acuerdos de paz con la insurgencia durante el gobierno de Arzú.

La UNE

Otro tanto sucede con la Unión Nacional de la Esperanza (UNE). Su candidato presidencial es Alvaro Colom Caballeros, y el

candidato vicepresidencial Fernando Andrade Díaz Durán.

La UNE se fundó en el Congreso de la República con diputados disidentes provenientes de las bancadas del PAN, Unionistas, Alianza Nueva Nación (ANN) y del FRG.

En el caso de Alvaro Colom, fue Viceministro de Economía con el gobierno de Serrano Elías. Posteriormente, siempre con el gobierno de Serrano, ocupó el cargo de Director Ejecutivo del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ). Ha sido miembro de la Comisión de Maquila de la Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales. Ha sido parte también del grupo MEGATEX, que se dedica a elaborar proyectos y contratos de maquila.

Fue familiar del alcalde capitalino Manuel Colom Argueta, asesinado durante el gobierno de Lucas García²⁰. También es familiar de la ex dirigente guerrillera Yolanda Colom, quien participó con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en la década del 70 hasta 1984, cuando se hizo disidente junto con su compañero, el desaparecido Comandante Benedicto, el escritor Mario Payeras, cuando éste renuncia a la Dirección Nacional del EGP, organización de la que fuera uno de sus fundadores.

Su apellido y su parentesco con Colom Argueta le valió ser el candidato presidencial de la ANN en las Elecciones Generales de 1999, cuando previamente se había convertido en Sacerdote Maya.

En el caso del candidato a Vicepresidente de la República, Fernando Andrade Díaz Durán, existe bibliografía²¹ en donde se encuentran citas como las siguientes:

“Los hermanos Rodolfo y Fernando Andrade Durán, a partir de 1960, diversifican su producción hacia cultivos no tradicionales como flores y legumbres, y transfieren parte de su capital hacia el comercio y las finanzas fundando una casa de agroexportación, cadenas de hipermercados y varios bancos²²: el Banco del Quetzal en 1985 y el Banco del Istmo en 1994. Ello les permite incorporarse a la nueva fase de globalización financiera (...) Fernando Andrade Díaz Durán fue ministro de Asuntos Exteriores en 1983, representante de Guatemala ante la OEA en 1985, representante de Guatemala ante Naciones Unidas en 1987, candidato a la Presidencia en las elecciones de 1990, asesor del Vicepresidente Arturo Herbruger durante el mandato de Ramiro de León Carpio (...) candidato a la Presidencia en las elecciones de 1995 apoyado

por un frente amplio formado por los partidos Demócrata Cristiano, Unión del Centro Nacional, Partido Socialista Democrático...”.

En 1983 *“...en Guatemala, se inició una recomposición del bloque hegemónico que va a dar origen a procesos de apertura política e intentos de democratización y consolidación de incipientes Estados de derecho, mediante la restauración de procesos electorales no viciados, retorno de gobiernos civiles de centro, aplicación de reformas sociales y reactivación de procesos regionales, que permitieron encontrar nuevas salidas a la crisis nacional y regional (...) Generalmente, estos procesos de transición fueron llevados a cabo por hombres pertenecientes a su clase, lo que hemos denominado intelectuales orgánicos de la clase dominante. En Guatemala: Fernando Andrade Díaz Durán y Álvaro Castillo Monge²³ (...) A principios de la década de los 80, se produjo una crisis de dominación, una falta de consenso sobre el modelo económico y el proyecto político a seguir; lo que generó fricciones al interior del bloque dominante, cuya máxima expresión tuvo lugar durante los gobiernos militares de Lucas García y Ríos Montt, de 1978 a 1983.*

Con el golpe de Estado de Mejía Victores, se inicia la remodelación del bloque en el poder y se modifica la correlación interna de fuerzas de la oligarquía, que presenta un nuevo proyecto político nacional y regional. A nuestro juicio, este proceso de transición política fue liderado por uno de los intelectuales orgánicos de la clase dominante: Fernando Andrade Díaz Durán, que por sus relaciones con las principales fracciones de la oligarquía nacional y centroamericana, sus buenas relaciones con un sector de los militares y el apoyo de ciertos lobbys norteamericanos, pudo iniciar la remodelación de la clase dominante, llevar a cabo, en 1984, la celebración de elecciones a la Asamblea Constituyente y un año más tarde, convocar elecciones generales y entregar el poder a un civil. Fueron las redes familiares vinculadas a la familia de los Andrade Díaz-Durán, las que apoyaron este proyecto. Entre ellas podemos citar a los Castillo Monge, Botrán, Castillo Falla, Cofiño, Novella, Herrera, Paiz Andrade, Vila, en su mayoría pertenecientes a las fracciones más modernizantes y con estrechas relaciones familiares y de negocios con los Díaz-Durán.

Fernando Andrade Díaz Durán juega un papel importante como intelectual orgánico del sistema y consideramos que es el artífice de la política de alianzas que se producen en el interior del bloque histórico, con los otros factores de poder y de la política internacional que permitió a Guatemala romper el

20 Ver “Partidos Políticos e Institucionalidad Electoral, primera parte”, en El Observador Electoral No. 3, agosto 2003.

21 Ver “La Pervivencia de las Redes Familiares en la Configuración de la Elite de Poder Centroamericana. El caso de la familia Díaz-Durán”, Marta Elena Casaús. Anuario de Estudios Centroamericanos Volumen 20, No. 2, 1994, pp. 41-69. Editorial de la Universidad de Costa Rica. De la misma autora también “Linaje y Racismo”. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Guatemala), 1992.

22 Fernando Andrade también sería socio del Banco Internacional con los Skinner-Kléé, uno de cuyos miembros es el actual Secretario General del Movimiento Reformador (MR), que integra la Gran Alianza Nacional (GAN) que apoya la candidatura de Oscar Berger.

23 Empresario proveniente de la familia de los Castillo, y uno de los principales accionistas del diario Siglo Veintiuno.

aislamiento internacional en que se encontraba desde 1978, e iniciar el proceso de apertura política y retorno a la institucionalidad. Como Ministro de Asuntos Exteriores durante el régimen de Mejía Víctores, obtuvo importantes logros en política exterior: consiguió abrir espacios en organismos internacionales como Naciones Unidas, OEA, a pesar de las innumerables condenas que el régimen de Mejía Víctores recibía. Reanudó relaciones diplomáticas con España, rotas desde el asalto de la embajada de España en 1980. Llevo a cabo en Centroamérica una política de neutralidad en el conflicto regional, propugnando una posición de apoyo a Contadora y de reactivación de la integración económica y política regional. Logró que Guatemala participara en las reuniones de San José I y II. Mejoró las relaciones diplomáticas con México con el tema de los refugiados (...) En síntesis, sentó las bases para se produjera un proceso de transición democrática, sin que la elite de poder se viera afectada, favoreciendo a los grupos más modernizantes del momento”.

Para las elecciones de 1990, “Fernando Andrade Díaz Durán (candidato presidencial), no supo buscar el apoyo en partidos de nuevo cuño y los tradicionales con los que contó, PR y PNR, estaban demasiado desgastados y deslegitimados por los fraudes electorales del pasado y por su política pactista con los militares”.

En 1993, “una vez electo popularmente Ramiro de León Carpio y Arturo Herbruger como Vicepresidente, Fernando Andrade Díaz-Durán aparece de nuevo en la escena política como asesor del Vicepresidente, colaborando activamente en el pacto de renovación de noviembre de 1993. En 1994, tras su renuncia como asesor de la Presidencia, empieza a tejer lentamente una compleja y amplia tela de araña con el respaldo de importantes miembros de sus redes familiares, de actores políticos y sociales nacionales y de organismos internacionales, hasta lograr presentarse como la tercer opción frente a Ríos Montt y a Álvaro Arzú, con el apoyo de un frente amplio representado por una alianza partidaria entre el partido Democracia Cristiana, DC, la Unión del Centro Nacional, UCN, el Partido Socialista Democrático, PSD y ciertos partidos pequeños de centro izquierda.”

Fernando Díaz-Durán “...en la elite de poder era el individuo que poseía mayor capacidad de alianzas nacionales e internacionales, mayor peso específico en la parametrización

de las élites y representaba al sector más modernizante de la oligarquía”.

“El último matrimonio de la red de los Díaz-Durán, el hijo de Fernando Andrade Díaz Durán, emparenta con la rama más poderosa de los Castillo, los Castillo Love²⁴, dándose de nuevo en 1992 la unión de capital agrario, industrial y financiero, y de dos de las familias más influyentes en la política y los negocios de la oligarquía guatemalteca. Con ello queremos poner de manifiesto el reciclaje de las redes familiares en el siglo XX”.

Otras citas²⁵ refieren que “Fernando Andrade Díaz-Durán actualmente es copropietario de una exportadora de café con los Falla y Cofiño, además es propietario de varias fincas de café en la Antigua. Funda el Banco del Quetzal con base financiera en los cafetaleros, militares²⁶ y con un amplio respaldo internacional”.

La incidencia en el ámbito de los negocios y la política de Fernando Andrade Díaz-Durán es poderosa. “A esto le unimos su vinculación con los militares, a través de sus enlaces matrimoniales con la familia Ariz²⁷. Por su trabajo de cerebro gris con la cúpula militar durante quince años, así como el prestigio internacional, producto de su política en el área, nos damos cuenta de la amplia capacidad de maniobra política que tuvo durante ese período”.

Finalmente, la misma autora agrega que “La importancia de Fernando Andrade Díaz-Durán, procede de su capacidad para aglutinar, durante la fase de transición, al conjunto de familias más modernizantes procedentes de la industria, el comercio y la agroexportación de productos tradicionales y no tradicionales que apoyaron el proceso de apertura política y articularon una nueva composición del bloque hegemónico. Las relaciones de parentesco de Fernando Andrade con las familias criollas tradicionales como: Falla, Cofiño, Herrera, Castillo, Asturias, Arrivillaga, Urruela y con las familias de origen extranjero como: los Wyld, Berger, Bory, Klee y Maegli, así como sus extensas conexiones con redes de familias salvadoreñas y nicaragüenses, le permitió obtener la suficiente capacidad de maniobra política para realizar la transición. Su lanzamiento posterior a la candidatura de la Presidencia con partidos políticos desprestigiados y la falta de un equipo y base social, le obligó a retirarse de la contienda electoral”²⁸.

24 Los Castillo Love, una de las familias que se derivan de los fundadores de la fábrica de cerveza, los Castillo Aycinena, y que ahora se encuentran ubicados en las ramas de alimentos y bebidas, constituyen los principales accionistas del Banco Industrial (BI).

25 “Guatemala: Linaje y Racismo”, op. cit.

26 El general retirado y ex Jefe de Estado en el período 1983-1985, Humberto Mejía Víctores, a quien se ha asociado con la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), sería accionista de este banco.

27 En la nota 88 del libro ya citado, Marta Elena Casaus apunta que: “los Ariz son de origen vasco y pasaron a establecerse en Guatemala en 1814, generalmente residieron en Quetzaltenango. poseen una larga tradición militar. a finales del XIX se vinculan con las familias Matheu, Bouscayrol, Aguirre y Díaz-Durán...”

28 Ver “El Retorno al Poder de las Elites Familiares Centroamericanas 1979-1990”. Marta Elena Casaus, en Revista Polémica No. 18, nota 27. Septiembre-diciembre de 1992. Marta Elena

Otras fuentes agregan lo siguiente: Tras el golpe militar de Mejía Víctores en 1983, *“El nuevo régimen militar se apresuró a formar un gobierno predominantemente civil; Fernando Andrade Díaz-Durán, un influyente político conservador y empresario financiero, cercano a los generales Rodolfo Lobos Zamora²⁹ y Héctor Nuila Hub³⁰, se convirtió en la figura clave de la transición política”³¹.*

Ya se comentó que Díaz Durán había sido asesor del Vicepresidente de la República, Arturo Herbruger Asturias, durante el gobierno de Ramiro de León Carpio en 1993-1995. Herbruger había sido nombrado para ese cargo por presiones de uno de los militares más oscuros del Ejército, el general retirado, Roberto Perussina, miembro de la denominada *Cofradía*, y quien era el Jefe del Estado Mayor de la Defensa del gobierno de Serrano Elías. Ya con Ramiro de León Carpio, Perussina fue ascendido a Ministro de la Defensa³².

Díaz Durán, conjuntamente con políticos y empresarios, sostenía reuniones con los miembros de la cúpula militar de la línea dura para complotar contra Ramiro de León Carpio, y sustituirlo por Herbruger en la Presidencia.

El estilo complotista de Díaz Durán no era nuevo. En uno de los tantos intentos de golpe de Estado que Cerezo experimentó, se le vio acompañado del ex diplomático argentino Gerardo Schamis, en el Palacio Nacional, el mismo día en que se gestaba un movimiento desestabilizador contra el gobierno³³.

Gerardo Schamis había sido Embajador de Argentina en Guatemala en 1958, cuando contaba con sólo 25 años, y durante la guerra de Las Malvinas (1981-1982), fue Embajador argentino en Francia. Schamis fue parte de la conspiración argentina en Centroamérica a principios de los años 80, colaborando en el tráfico de armas y en el envío de asesores militares que contribuyeron con la represión política en Honduras, El Salvador y Guatemala. Estaba muy ligado a las dictaduras militares argentinas y su vínculo con la extrema derecha y su anticomunismo hicieron que desarrollara lazos con la ultraderecha guatemalteca vinculada al MLN. En 1985, Schamis se convirtió en uno de los directores de la petrolera Basic Resources, junto con el empresario, en este entonces emelenista, Manuel Ayau, en donde permaneciera hasta hace poco.

Durante el gobierno argentino de Carlos Saúl Menem, fue asesor en Relaciones Exteriores de dicho presidente. Schamis también

fue asesor de Vinicio Cerezo en 1987.

Con la UNE se encuentra el coronel retirado, hasta hace poco columnista de *el Periódico*, y ex Director de Inteligencia, Mario Alfredo Mérida González, quien también se desempeñó como Viceministro de Gobernación con el gobierno de Ramiro de León Carpio. También fue Subjefe del Archivo en 1988. En 1981 fue estudiante de inteligencia en la escuela militar de Argentina, y en 1984 estudiante de inteligencia en la Escuela Militar de Taiwan, mientras que un año después, en 1985, desempeñó los cargos de oficial de inteligencia en las zonas militares de Quiché y Puerto Barrios, cargo que había ocupado también en 1982.

Mérida va como candidato a diputado por el Listado Nacional, junto a Rafael Barrios, Mario Flores, que llegaron del Unionismo, y que antes habían militado en el PAN, así como Conchita Mazariegos, ex Magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC).

También están con la UNE, el ex Rector de la USAC, Eduardo Meyer, gestión durante la cual se dio el ingreso y allanamiento de las instalaciones universitarias por parte del Ejército en septiembre de 1985. Meyer estuvo militando con la DCG y fue diputado por este partido. Meyer encabeza ahora el listado por el Distrito Metropolitano. Además aparece como Secretario de Organización, Rolando Torres, quien como se recordará, fue Secretario General del DIA, y que después de las elecciones de 1999 fuera expulsado de esta organización por manipulación de la asamblea donde fuera reelecto en el cargo. También, Ramiro Mackdonald Blanco hijo, como Director de Comunicación de la campaña de Colom.

El caso de Transparencia

Otro partido que llama la atención es el Partido Transparencia, el cual había hecho alianza con CASA y la ANN, para apoyar la candidatura del ex Alcalde de Quetzaltenango, Rigoberto Quemé.

Detrás de Transparencia se encuentra Alfonso Cabrera Hidalgo, quien fuera un alto dirigente democristiano durante el gobierno de Vinicio Cerezo, además de contar con una trayectoria demócrata cristiana de varias décadas. Vale recordar que Cabrera Hidalgo fue Ministro de Relaciones Exteriores durante el último año de gobierno de la DCG, y también fue el candidato

29 Lobos Zamora ocupó altos cargos dentro del Ejército con los gobiernos militares que se sucedieron desde 1975 hasta 1984.

30 Ocupó altos cargos militares con los gobiernos de Lucas García, Ríos Montt, Mejía Víctores y Cerezo.

31 Ver *“El Entorno Histórico” en GUATEMALA NUNCA MÁS. Tomo III*. REMHI. ODHA. Página 219, 1998.

32 En tanto que Perussina ocupaba este cargo durante el gobierno de Serrano Elías, el Jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP) era el también general retirado, Francisco Ortega Menaldo, a quien se vincula como uno de los principales asesores del actual Presidente de la República, Alfonso Portillo, y se le asocia con operaciones de narcotráfico y contrabando que tienen lugar en la parte sur del país, frontera con México.

33 *Inforpress Centroamericana No. 883*. 26 de abril de 1990, página 4.

presidencial de este partido para las Elecciones de 1990.

No extraña, por tanto, que haya sido recién nombrado como Secretario General de Transparencia, Juan Pablo Cabrera Hidalgo, hijo de Cabrera Hidalgo.

Cabrera Hidalgo también participó con el gobierno del FRG y Portillo a principios de la administración actual. En algún momento también se le ha mencionado como asesor político de partidos en El Salvador, particularmente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en la oposición.

También se encuentra el banquero Francisco Alvarado Macdonald y el empresario de telecomunicaciones, José María Coma, quien fundó la empresa Millicom International Cellular (COMCEL)³⁴ de telefonía celular, durante el gobierno de Cerezo. A Coma se le mencionó en 2002, durante un corto tiempo, como el candidato presidencial de Transparencia para los actuales comicios.

Según Rachel Macleary³⁵: *“Por medio de la primera empresa de teléfonos celulares de Guatemala, COMCEL, Cerezo, Alfonso Cabrera y Francisco Alvarado se beneficiaron personalmente de contratos lucrativos con el gobierno...”*. Esto explica, en parte, la decisión de Alfonso Bauer Paiz, diputado por la ANN, de renunciar a ese partido tras identificar a Transparencia como un partido de derecha.

Cabe recordar que Coma ayudó a financiar la campaña portillista del FRG en 1999, y que Transparencia fundamentalmente se fundó con miembros de la DCG que se separaron en el 2000, cuando Vinicio Cerezo Arévalo desplazó a Vinicio Villar Anleu de la Secretaría General. Por ello es que no extraña que a Transparencia se le haya identificado como el partido de ex demócrata cristianos y portillistas.

También ha sido vinculado a esta organización, el empresario de radiodifusión y ex Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas durante la actual administración eferregista, Luis Rabbé, aunque participa como el candidato a la Alcaldía de Guatemala por el partido oficial.

Durante el presente año, en la víspera de los reacomodos electorales, también se especuló que funcionarios del actual

gobierno como el Presidente del Banco de Guatemala (BANGUAT), Lizardo Sosa, y Edgar Gutiérrez, Ministro de Relaciones Exteriores, mantuvieron negociaciones con directivos de Transparencia³⁶. Sin embargo, también se dijo que Gutiérrez estaba con la UD. Otro a quien se vinculó a Transparencia fue al empresario y agricultor, Humberto Pretti, quien también es columnista de prensa.

Luego de haber salido de la alianza con CASA y la ANN por problemas de hegemonismo y la falta de acuerdos para negociar las cuotas a cargos de elección popular, en apoyo a la candidatura de Rigoberto Quemé, Transparencia sólo participará en candidaturas a diputaciones y alcaldías.

La coalición GANA

Pero de todos estos partidos, sin duda es la Gran Alianza Nacional (GANAN) la que ha tomado mayor importancia. Esta alianza agrupa al Partido Patriota (PP), al Partido Solidaridad Nacional (PSN), y al Movimiento Reformador (MR).

El candidato presidencial de GANA es Oscar Berger Perdomo, y el candidato a la Vicepresidencia de la República es Eduardo Stein.

Berger Perdomo fue candidato presidencial del PAN en las pasadas Elecciones Generales de 1999. Fue alcalde capitalino durante dos períodos consecutivos de 1991 a 1999, durante los gobiernos de Jorge Serrano Elías (1991-1993), Ramiro de León Carpio (1993-1995), y de su compañero de organización, Alvaro Arzú Irigoyen.

Es Abogado y Notario, y junto a dos de sus hijos fundó un bufete con el también abogado Rodolfo Sosa de León, quien fuera Presidente de la petrolera Basic Resources. Algo que caracterizó el período en que Berger fue alcalde, fueron los proyectos de asfaltado de calles en la ciudad capital, el cual se supone provenía de la refinería de Basic Resources, coincidentemente, en el período cuando Sosa de León ostentaba el cargo de la misma, como ya se apuntó.

Uno de los hijos de Berger está casado con una hija de Sosa de León. Berger Perdomo está casado con Wendy Widman Lagarde, quien es *“hija del rico cafetalero, industrial y*

34 Basada en Luxemburgo, COMCEL posee el 55% de las acciones, mientras el resto lo tienen accionistas de Costa Rica y Guatemala. Es la competidora más importante de Telgua.

35 *“Imponiendo la Democracia: Las Elites Guatemaltecas y el Fin del Conflicto Armado”*, op. cit., página 149.

36 Esto se da en el marco de lo que ha venido trascendiendo en algunos círculos políticos, en el sentido de que el grupo de profesionales ligados a Portillo que lo han acompañado en este gobierno del FRG, encabezados por Gutiérrez, han venido construyendo un proyecto político de cara, primero, a mantenerse con perspectiva y presencia en el proyecto del FRG, o salir y negociar con otro partido que esté participando en los actuales comicios, o mantener un bajo perfil en los actuales comicios y trabajar a futuro para las próximas Elecciones Generales del 2007. De ahí que se hable de que han mantenido negociaciones con partidos con partidos como Transparencia. La construcción de este proyecto político implicaría la conformación de un comité cívico, primero; apoyarse con una fundación o una ONG, después; fundar un medio de comunicación posteriormente, para terminar con la legalización de un partido político. En esta iniciativa no sólo estarían involucrados profesionales que están en el actual gobierno alrededor de la SAE y otras dependencias del Estado, sino también personajes de ONG, etc.

37 Widman Luna es propietario del Ingenio Guadalupe.

*financiero Walter Widman Luna*³⁷, lo que le permite ingresar a una de las redes del poder económico de Guatemala³⁸.

En el caso de Eduardo Stein, como ya es conocido, ha sido Embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), jugando un papel importante en la crisis institucional que se vivió en Perú a raíz de la salida de Alberto Fujimori. También fue Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Arzú, y militó con la izquierda armada, específicamente con el EGP. Se le ha vinculado a la Fundación Soros en Guatemala, precisamente porque el Director de la misma es su hermano, Ricardo Stein.

Se cita como uno de los principales financistas de la campaña de Berger a Álvaro Castillo Monge, quien es *“ingeniero y uno de los hombres más activos y representativos de la iniciativa privada en la actualidad. Durante 1986 y 1987 ha sido Presidente de FECAICA³⁹, Presidente del CACIF, miembro de la directiva del mismo organismo, Presidente del CAEM⁴⁰, de la Cámara de Industria y Director del periódico ‘El Industrial’, es accionista del diario Siglo XXI; está casado con Claudia Rodríguez, es propietario de extensas tierras en la Costa Cuca, gran productor de café y posee inmuebles en la capital (...) La familia Castillo Monge y en especial Álvaro Castillo Monge, representa a una de las fracciones de clase modernizantes en los últimos tiempos que más colaboró con el proceso de transición democrática. Puede ser considerado como parte activa de la moderna fracción agroindustrial que pretende conformar en el país un nuevo bloque hegemónico que desplace a la oligarquía tradicional...”*⁴¹.

Mientras tanto, Eduardo González, uno de los principales accionistas del Banco del Café (BANCAFE), y miembro de la Gremial de Exportaciones No Tradicionales (AGEXPRONT), se desempeña como Jefe de Campaña de GANA. Fue ministro de Economía con el gobierno de Ramiro de León Carpio y es hijo del fundador del BANCAFE.

A ellos se suma el abogado Alfredo Skinner-Klée Cantón, quien es el Secretario General del MR. Está casado con Leslie Hemstead Diesseldorf, considerada la familia de cafetaleros más poderosa del país. Ambas familias, de origen alemán, son las mayores productoras de café de altura por estar situadas en Alta Verapaz.

Proviene de una familia de abogados y diplomáticos así como políticos, con raigambre de hace dos siglos. El más famoso de todos es el abogado Jorge Skinner-Klée, quien ha sido diputado, y ocupado cargos en Relaciones Exteriores. Es banquero y accionista del Banco Internacional, asociado con Fernando

Andrade Díaz-Durán. Participa en una firma de abogados con Alejandro Arenales Catalán; este último de una familia poderosa del país. Ambos fueron dirigentes de la desaparecida Unión del Centro Nacional (UCN).

También se incluye a Manuel Ayau García del MR, quien es dueño de producción de fincas de banano en Izabal, y es hijo de Manuel Ayau Córdón, quien como ya se apuntó, es uno de los principales ideólogos del neoliberalismo en Guatemala, y en estas elecciones participando con la DCG. Manuel Ayau García es miembro de la Dirección de la UFM.

Igualmente se encuentra dentro de la GANA, y militando dentro del MR: Juan Alejandro Sánchez, miembro de la AGEXPRONT; Juan Luis Florido, quien fuera candidato a Fiscal General; Mamfredo Topke, ex Presidente de la Asociación Nacional del Café (ANACAFE); Hugo Enrique Argueta, quien como se recordará, fue el Secretario General del desaparecido Partido Laborista Guatemalteco (PLG), sobre el cual se fundó el MR al vender Argueta la ficha.

Cabe mencionar del MR, a Jorge Briz, empresario ferretero, y ex Presidente de la Cámara de Comercio durante mucho tiempo. Estuvo vinculado al PLG y ahora es el candidato a Alcalde de la Ciudad Capital por la GANA.

También se ha señalado como uno de los principales financistas de la campaña de la GANA a Dionisio Gutiérrez, dueño de Pollo Campero, y miembro fundador del poderoso grupo empresarial MULTINVERSIONES, una sociedad proveniente de la alianza de dos familias de la oligarquía guatemalteca: Los Gutiérrez, que empiezan a conformar su capital desde principios del siglo XX; y los Bosch, cuyos primeros miembros llegaron al país en el siglo XIX provenientes de Alemania, y ubicados primero en la producción cafetalera, y después en la industria y el comercio.

El grupo MULTINVERSIONES ha incursionado en diversas ramas de la actividad económica del país como por ejemplo: Embutidos Toledo, harinas, avícolas, etc.

A Gutiérrez se atribuye haber financiado la campaña portillista del FRG en 1999, en parte, por la amistad que le unía con el actual Vicepresidente de la República, Francisco Reyes López. También es Director del programa de televisión “Libre Encuentro”, tribuna desde donde ha constituido ahora, un frente contra el FRG.

En el caso del Partido Patriota (PP) vale mencionar a los cafetaleros Carlos Torrebiarte y Rafael Espada, miembros de

38 Citado en “Linaje y Racismo”, op. cit.

39 Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica.

40 Cámara Empresarial de Guatemala.

41 “Linaje y Racismo”, op. cit.

la AGEXPRONT. Al primero como se recordará, se le mencionó en un principio como el candidato presidencial del PP, antes de que esta organización, de reciente fundación, conformara a la GANA.

En el PP también se aglutinan los militares retirados: Otto Noack, teniente-coronel que fuera Subjefe del Centro de Adiestramiento y Operaciones Especiales Kaibil, entre 1988 y 1990, así como un cercano colaborador del general retirado, Otto Pérez Molina. Este último fue Jefe de Inteligencia (D-2) y miembro de la Comisión Gubernamental que negoció los Acuerdos de Paz con la URNG.

En el PP también encontramos al general retirado y ex Ministro de la Defensa en época de Álvaro Arzú, Héctor Barrios Celada. Se desempeñó como comandante de la zona militar de Quiché en 1994, y como Director de Operaciones (D3) entre 1991 y 1993.

Por el lado del Partido Solidaridad Nacional (PSN) se encuentra Ricardo Castillo Sinibaldi, miembro de la abolenga familia Castillo. Es uno de los principales accionistas de la embotelladora Mariposa, que envasa Pepsi-Cola para Guatemala y El Salvador, y productora de una de las líneas de aguas gaseosas, junto con producción de alimentos para Guatemala. Es el actual Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Recreación de los Trabajadores (IRTRA), y fue Ministro de Desarrollo Urbano y Rural durante el gobierno de Serrano Elías (1991-1993).

Finalmente, con el PSN se encuentra como Secretario de Organización del partido, el militar retirado Edgar Dedet Guzmán. Dedet Guzmán fue Director de Personal y Logística entre 1990 y 1993, así como ocupó cargos de importancia en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), donde llegó a comandante de la misma.

También está el general retirado Sergio Camargo Murallas, quien fue Jefe del Estado Mayor de la Defensa con el gobierno de Arzú, y quien se desempeñaba como Segundo Jefe del Estado Mayor Presidencial en 1990, cuando fue asesinada Myrna Mack. Fue Director de Logística en 1987 y Oficial de Operaciones entre 1978 y 1983. En la actualidad es miembro del Comité Olímpico Guatemalteco.

Sin embargo, quizá la máxima figura de la GANA sea el Secretario General del PP, el general retirado Otto Pérez Molina. Como se sabe, a Pérez Molina se le atribuye ser el principal estrategia del PP y uno de los principales promotores de la

conformación de la GANA, a partir de su vinculación con Dionisio Gutiérrez y su relación con el Director de *el Periódico*, Rubén Zamora.

De acuerdo al análisis que el Tomo III de REMHI presenta, el historial del general Pérez Molina es extenso y estratégico. En diversos apartados, este documento reza lo siguiente: En las vísperas del autogolpe de Serrano Elías, “...una parte del sector empresarial que había logrado articular una confluencia de intereses con altos jefes militares que habían jugado un papel significativo en el planteamiento de la doctrina de la Estabilidad Nacional en tiempos de Gramajo, inició una aproximación a los sectores empresariales, profesionales y políticos cuestionando la línea del Alto Mando. En este grupo destacó especialmente el coronel Otto Pérez, Director de la Inteligencia Militar (D-2)”⁴².

Los reacomodos dentro del ejército en 1992 fueron insuficientes para calmar los enfrentamientos en su interior: “El narcotráfico pasó a ocupar un papel muy fuerte en las luchas entre las camarillas”⁴³.

Asesinatos de militares y nuevos reacomodos caracterizaron los primeros meses de ese año. Un hecho importante que reflejó la magnitud de los enfrentamientos fue cuando el coronel, ahora retirado, Roberto Letona Hora, Jefe del Estado Mayor del Ministro de la Defensa y miembro de la promoción de Otto Pérez Molina, fue secuestrado en el Cuartel General y enviado como agregado militar a Costa Rica. Letona Hora, miembro de *La Cofradía*, aparece en algunas fotos tomadas con el actual Presidente de la República, Alfonso Portillo y Alfredo Moreno, en Estados Unidos⁴⁴.

“Pero el marco internacional continuó ensombreciéndose para el Ejército en 1993, tras el movimiento de la sociedad civil. Ya entonces se perfilaron dos estrategias bien claras en el Ejército: la de los señores de la guerra y la de quienes se preparaban para manejar un proceso de paz. Mientras los primeros seguían apoyándose en el poder presidencial y su EMP, los segundos, entre los que destacaban el general Mario Enríquez, el coronel Otto Pérez y el mayor Mauricio López Bonilla, iniciaban aproximaciones a sectores empresariales, políticos y profesionales dispuestos a limitar la autocracia de Jorge Serrano”⁴⁵.

Fracasos militares y el “escandaloso intento del Ministro de la Defensa por participar en los negocios de la privatización”⁴⁶, dividieron aún más a los castrenses con la sociedad civil. Así se llegó al intento del golpe del 25 de mayo de 1993, cuando el

42 Ver el documento “Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). Tomo III”, página 314.

43 Ver REMHI. Tomo III, página 320.

44 Ver diario *el Periódico* del 12 de noviembre de 2002.

45 Informe REMHI, op. cit., página 321.

46 Informe REMHI, op. cit., página 321.

Entre la Seguridad Nacional y la Estabilidad Nacional

Héctor Alejandro Gramajo, Ministro de la Defensa durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1990), a quien se atribuye ser uno de los principales ideólogos de la Tesis de la Estabilidad Nacional y uno de los principales promotores y estrategas del golpe de Estado de 1982 que derrocara al gobierno militar de Fernando Romeo Lucas García, y que no dejara que tomara posesión el general Aníbal Guevara, quien fuera Ministro de la Defensa durante el gobierno de Lucas García, y ganado las elecciones mediante fraude electoral.

La Tesis de la Estabilidad Nacional es descrita y analizada en su expresión práctica por el mismo Gramajo en su libro “De la Guerra... A la Guerra. La Difícil Transición Política en Guatemala”, y surge dentro del Ejército, en un principio, como un planteamiento contrario a la tesis de la Doctrina de la Seguridad Nacional que venía siendo aplicada por la mayoría de los Ejércitos y las Dictaduras Militares que se sucedieron en Latinoamérica a partir de las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, apoyadas por Estados Unidos, y a la que en Guatemala se asoció el grupo de militares de viejo cuño o de línea dura que gobernaron el país desde finales de la década de los 60, cuando durante el gobierno de Carlos Arana Osorio se pone en marcha el proyecto contrainsurgente del Ejército, el cual va a adquirir su máxima expresión con el golpe de Estado de 1982.

El golpe de Estado de 1982 va a ser un híbrido precisamente entre dos concepciones, formas y procedimientos de llevar a cabo la contrainsurgencia como proyecto político:

a) La Tesis de la Seguridad Nacional que propugnaba por derrocar a la insurgencia sin negociar con ella, masacres en masa pero sin una estrategia que conllevara a la conformación de un sistema político tutelado por el Ejército, aniquilamiento del movimiento popular y mantenerse en el poder a toda costa. A esta tesis suele asociarse el grupo de militares que gobernaron durante el período conocido como “El Generalato”, de 1970 a 1982, y dentro del cual se conformó lo que se conoció como la “Burguesía Burocrática”, una mezcla de militares, funcionarios públicos e intelectuales que se enriquecieron del Estado al amparo de corrupción y, por ejemplo, la construcción de obras sobrevaluadas, amén de las violaciones a los derechos humanos, entre otras cosas. Este grupo de militares son los que si bien van a salir de la escena pública en 1982, se reciclan dentro de los mandos del Ejército y se mantienen dentro de la administración pública con influencia.

De la “Burguesía Burocrática” se va a derivar “La Cofradía”, primero, y “El Sindicato”, después, que van a tomar parte, algunos de sus miembros, en la fundación de lo que hoy constituye el FRG, en alianza con empresarios que se van a enriquecer con el proceso de apertura económica, en función de los réditos que ha dejado el conflicto armado, el Ajuste Estructural, la especulación financiera, y la confluencia de intereses foráneos que van a penetrar la economía y las relaciones políticas que hoy tienen gran importancia: narcotráfico, contrabando y crimen organizado, con sus distintas ramificaciones.

b) La Tesis de la Estabilidad Nacional propugnaba por una aplicación del proyecto contrainsurgente bajo una estrategia que conllevara la política de tierra arrasada y las masacres en masa, pero con un discurso del rescate de la institucionalidad democrática de las manos del comunismo, y con el compromiso de rescatar al Ejército de la debacle en que estaba sumido por parte de los militares que encabezaron “El Generalato”. A diferencia de la otra tesis, esta tesis planteó la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y a Elecciones Generales. Fue impulsada por “los oficiales jóvenes”, cuya connotación devino del hecho que tenían rangos menores como capitanes, coroneles, mayores, etc., y en oposición a la oficialidad de mayor rango que había conducido a la institución castrense. También fue denominada con el nombre de los “oficiales constitucionalistas”.

Aquí se ubicaron oficiales que después conducirían la institución en las negociaciones con URNG y conducirían a la institución castrense ya con los gobiernos civiles. Su característica fue que eran oficiales académicos, estudiados y especializados en guerra contrainsurgente en academias y centros militares de Estados Unidos y en Israel, que encabezaron la política contrainsurgente a la que el golpe de Estado de 1982 dio continuidad, y que con el conflicto armado y las negociaciones también adquirieron poder dentro de la administración pública y dentro del Ejército. También se convirtieron en empresarios al igual que sus antecesores, hicieron alianzas con empresarios de nuevo cuño y pasaron a tener participación, también, en el control de áreas estratégicas del Estado como inteligencia, control de las aduanas, seguridad pública, etc.

Desde esta perspectiva, el golpe de Estado de 1982, más que un desplazamiento de los oficiales la “Burguesía Burocrática”, constituyó un proyecto para rescatar la crisis de hegemonía existente dentro del Ejército y la caducidad del proyecto político militar-empresarial que se venía constituyendo desde los años 60 del siglo XX. Fue la expresión de una negociación, un balance y una alianza entre los oficiales de las dos tesis ya descritas que, después del golpe de ese período y ya con los gobiernos militares, se van a ramificar y sus intereses se van a diversificar, hasta el punto que hoy, en el contexto del actual proceso electoral 2003, algunos de ellos, de ambos bloques, aparecen compitiendo dentro de los diferentes partidos políticos.

grupo del Ministro de la Defensa, general José Domingo García Samayoa, general Roberto Perussina y del general Francisco Ortega Menaldo, descubrieron que no tenían el apoyo de los comandantes militares para tal aventura.

“Pero desde el primer momento del golpe se organizó una conspiración entre los sectores militares constitucionalistas, encabezados por el director de Inteligencia (D-2), coronel Otto Pérez Molina, y los empresarios modernizantes, que liberaron al Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, y mantuvieron una intensa actividad de coordinación en las protestas ciudadanas (...) Por parte de los sectores empresariales, el objetivo principal parecía ser limpiar la mesa, de manera que el programa de modernización económica, fundamentalmente la privatización de las empresas del Sector Público, se realizara sin interferencias de los partidos ni los organismos del Estado”⁴⁷.

Uno de los puntos de coincidencia entre los militares constitucionalistas y los empresarios modernizantes fue las negociaciones por la paz, “convencidos de que éstas podrían abrir las puertas financieras y comerciales en el mercado internacional”⁴⁸.

A pesar de las protestas ciudadanas, el Ministro de la Defensa, García Samayoa “se empeñó en apoyar al presidente y destituyó al coronel Otto Pérez, enviándolo a Cobán...”. A esto siguieron movimientos militares en contra de García Samayoa, y sectores civiles impulsaron la lucha por la autodepuración del Congreso. Entre los miembros de la sociedad civil cuya participación fue evidente, estaban Lionel Toriello y José Rubén Zamora⁴⁹. Cuando el 6 de junio de 1993, el Congreso eligió a De León Carpio como Presidente de la República, éste nombró a Pérez Molina como jefe del EMP⁵⁰.

La estructura militar expresó una mezcla de militares ligados a “La Cofradía” y a “El Sindicato”, sin importar si pertenecían a la misma promoción. Sin embargo, “La Cofradía” siguió controlando la escala de mando y los espacios clave de los aparatos de seguridad.

Los militares de línea dura, que ocupaban todavía los puestos clave, como el general Quilo Ayuso, sostuvieron reuniones con Fernando Andrade Díaz-Durán, asesor del Vicepresidente de la República, Arturo Herbruger Asturias, para forzar la dimisión de De León Carpio, y ascender a Herbruger a la Presidencia de la República. Y a pesar que siete meses después se desplazó a ese grupo de militares duros, la llegada del coronel y ex jefe de inteligencia, Mario Mérida⁵¹, al Viceministerio de Gobernación, demostró que dicho grupo mantuvo su presencia.

“...Las presiones empresariales, que hicieron fracasar los dos gobiernos civiles anteriores, sembraron también de incertidumbre el gobierno de Ramiro de León, independientemente de sus propias debilidades y vacilaciones (...) En los últimos tiempos de Serrano se produjo un acercamiento entre un sector renovador de la alta oficialidad y algunos elementos empresariales y políticos decididos a preparar un cuadro estratégico más favorable frente a una negociación de paz que preveían como inevitable a mediano plazo. Entre los empresarios destacaron Dionisio Gutiérrez, Director del programa televisivo Libre Encuentro, miembro del grupo empresarial Pollo Campero y de unos de los mayores grupos financieros centroamericanos, Multiinversiones; José Rubén Zamora y Lionel Toriello, directivos del diario Siglo Veintiuno, que agrupaba a un sector modernizante de la Cámara de Industria, ahora participando en el sector financiero (los Castillo, los Novella), junto a grupos comerciales como los Paiz y los poderosos azucareros”⁵².

La crisis que permaneció con el gobierno de De León Carpio, obligó a que el gobierno conformara el denominado “Comité de Crisis”, que a pesar de tener una estructura y estar integrado por funcionarios clave de la administración, en realidad fue manejando tras bambalinas por el entonces Jefe del EMP, Otto Pérez Molina.

Esa crisis, que se manifestaba en la cruzada por la depuración de los Poderes Judicial y Legislativo que impulsaba De León Carpio “bajo fuertes presiones del sector empresarial”⁵³, hizo que el Presidente del Congreso, el demócrata cristiano, José

47 Ver Informe REMHI, Tomo III, página 323.

48 REMHI, op. cit., página 323.

49 Informe REMHI, op. cit., página 324.

50 Dos fuentes de diferentes perspectivas que también pueden ser consultadas al respecto de éstas jornadas que tuvieron lugar antes del golpe de Estado de Serrano Elías, durante esta intentona, particularmente las negociaciones que se dieron entre los grupos empresariales y militares que hegemonizaron la jornada, así como después, particularmente el ascenso de Ramiro de León Carpio a la Presidencia de la República, y la posterior depuración del Congreso de la República, son: “Imponiendo la Democracia. Las Elites Guatemaltecas y el Fin del Conflicto Armado”, Rachel Mcleary. Editorial Artemis Edinter, 1999;

51 Como ya se refirió antes, Mérida participa en estas Elecciones Generales 2003 con la UNE de Alvaro Colom, y va como diputado al Congreso de la República.

52 Informe REMHI, op. cit., página 326.

53 Informe REMHI, op. cit., página 328.

Lobo Dubón, señalara al *“EMP, al grupo empresarial Gutiérrez-Bosch y a los azucareros, a través de sus medios Siglo Veintiuno y Crónica, como los poderes que intentaban ajustar la institucionalidad política a la medida de sus intereses”*⁵⁴.

*“En enero de 1994, con el auge de los secuestros de empresarios y el surgimiento de numerosos casos de militares implicados en actos delictivos, comenzó a hablarse en medios empresariales de una nueva división en el Ejército, entre los corruptos y los honrados. Para entonces, la mayoría de los oficiales que habían llegado al rango de tenientes-coroneles y coroneles, encabezados por el coronel Otto Pérez Molina, estaban interesados en llegar a un acuerdo con el sector modernizante de los empresarios, para participar en el proceso de privatización o en los proyectos económicos que surgieran del proceso de paz. Frente a éstos, los miembros de promociones inferiores, liderados por algunos ex oficiales que habían lucrado con el patrimonio del Estado, anunciaban que las empresas a privatizar eran estratégicas y debían mantenerse bajo control del Estado”*⁵⁵.

Con las Elecciones Generales de 1995, que definieron como Presidente de la República, al panista Álvaro Arzú, se demostró, en los primeros meses, que el PAN no había generado relaciones previas con los militares. Sin embargo, sí había mantenido relaciones sistemáticas con la inteligencia del EMP, con Otto Pérez Molina, Otto Noack, y el secretario de inteligencia, coronel José María Argueta.

Con las negociaciones de paz en marcha, el gobierno de Arzú nombró, en 1996, una nueva Comisión Gubernamental para la Paz (COPAZ), que estaría integrada entre otros, por Otto Pérez Molina, quien también había sido nombrado Inspector General del Ejército, y a quien se le consideraba pieza clave en la transición del gobierno de De León Carpio al de Arzú.

No es raro entonces que Pérez Molina encabece el Listado Nacional por la GANA.

Con la GANA, integrada como miembro del PP, está la actual diputada Anabella de León, quien buscaría su reelección encabezando el Listado Metropolitano. Como se recordará, de León militó con el PAN, se pasó al Unionismo, para después declararse independiente y aparecer posteriormente con la UNE, del cual renunció y aparecer ahora con el PP.

También se encuentran participando con la GANA, Oliverio García Rodas, Julio Fernández Ligorria, y Jorge Herrera, alias “El Tanque”. A estos tres personajes, el Director de *el Periódico*, José Rubén Zamora los ha vinculado ser afines al crimen organizado.

En el caso de García Rodas, quien fuera miembro y diputado de la desaparecida UCN, se encuentra como candidato a diputado por el Listado Nacional presentado por la GANA, y como se recordará, fue despedido como asesor de la Embajada de Estados Unidos, por vincularse con el negocio de tráfico de ilegales. En el caso de Ligorria y Herrera, el primero es un ex militar que ocupó cargos dentro del Ejército en el pasado, en tanto que el segundo es un ex militante del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) a quien el Ejército capturó y lo convirtió en un intelectual orgánico para que trabajara en tareas de contrainteligencia.

El Partido Unionista (PU)

En el caso del Partido Unionista, reúne a los viejos dirigentes del PAN.

Su candidato presidencial es Fritz García-Gallont, actual alcalde capitalino y empresario agroexportador. Tiene vínculos con la Financiera Agrocomercial y el proyecto San Francisco, ubicado en la carretera al Pacífico.

Es familiar de Alvaro Arzú Irigoyen, actual candidato a Alcalde a la Ciudad Capital por los unionistas y ex Presidente de la República. Arzú fue miembro de las juventudes del MLN, así como Director del INGUAT con el gobierno de Lucas García, y Alcalde de la Capital ya en una oportunidad, en el período 1986-1990.

Arzú proviene de una de las familias criollas de Guatemala, con muchos vínculos con otras familias del bloque de poder hegemónico, tales como los García Granados, al punto que se menciona a su suegro, Raúl García Granados como uno de los principales financistas de la campaña presidencial de los Unionistas. Es dueño de una de las cuatro avícolas importadoras más grandes e importantes del país, y accionista de la polémica Compañía Petrolera del Atlántico.

Con los unionistas también se encuentra el empresario agroindustrial, Luis Reyes Mayén, quien fuera Presidente, tanto de la Cámara del Agro como del CACIF.

El PAN

En el caso del Partido de Avanzada Nacional (PAN), cuyo Secretario General es Leonel López Rodas, y quien a la vez es el candidato presidencial, fue Ministro de Energía y Minas y Presidente del Congreso durante el gobierno de Arzú, y está vinculado a las transnacionales de combustible.

54 Informe REMHI, op. cit., página 328.

55 Informe REMHI, op. cit., página 336.

El actual candidato a alcalde capitalino por el PAN es el empresario de la construcción Mauricio Urruela Kong, miembro de una las ramas más influyentes y con mucho poder dentro del sector económico.

Uno de los principales respaldos económicos del PAN proviene de Alejandro Botrán, empresario del monopolio del ron en Guatemala, y con vínculos financieros, la agroindustria y el comercio. Botrán es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN actualmente. No salió de la organización cuando Berger es postulado por la GANA.

Botrán además es socio fundador del Banco de Exportación (BANEX); es azucarero y propietario del Ingenio Santa Ana, uno de los cuatro más importantes en producción azucarera del país, así como ejecutivo de la Aseguradora La Nación, la cual se formó con la unión de los bancos De Exportación, Americano, propiedad de Ricardo Bueso, Uno y Continental; éste último banco con vinculaciones con Dionisio Gutiérrez; participó en las negociaciones por la paz como representante empresarial durante el gobierno de Serrano Elías; ha sido Presidente del CACIF, de la Cámara de Industria y de la Asociación de Azucareros de Guatemala (AZASGUA). Durante la campaña electoral de 1999, fue potencial candidato presidencial del FRG, de la cual desistió a último momento. Posee el negocio del ron y licores en Guatemala.

Además de Botrán, se cita como miembro del partido a Emilio Saca Dabdoub, quien ha sido diputado del PAN y fue Secretario Ejecutivo de la Presidencia durante el gobierno de Arzú.

El cuñado de Saca es el agricultor y azucarero Oscar Alberto Escamilla, quien es propietario del Ingenio Santa Teresa. Integró el nuevo Congreso de la República como diputado cuando asumió Ramiro de León Carpio en 1993, tras el autogolpe de Serrano Elías. A su esposa se le vinculó con evasión fiscal, en el mismo contexto en que también se vinculó a la esposa de Alfredo Moreno⁵⁶. A Saca se le considera artífice de las divisiones del PAN a finales de los 90, pues siempre se opuso a Berger, lo que podría explicar, entre las otras razones ya argumentadas, la falta de acuerdos entre Berger y la cúpula panista.

El Partido DSP y José Ángel Lee Duarte

El candidato presidencial del partido Democracia Social Participativa (DSP), una vieja figura política con partido “nuevo”.

Lee Duarte estaría apoyado por un fuerte sector de las ex Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), particularmente aquel que se ha vinculado con viejos militares en retiro aglutinados en la Asociación de Veteranos Militares (AVEMILGUA), a quienes también se relaciona con el general retirado, Manuel Callejas y Callejas.

Lee trae a la memoria los gobiernos militares de la década del 80 y las pugnas internas que rodearon al Partido Revolucionario (PR).

Un poco de historia. Cuando en 1982, el extinto PR apoyó al candidato presidencial general Ángel Anibal Guevara, comenzó la decadencia de este instituto político. Tras el golpe militar que derribó a Lucas García, en 1982, el PR experimentó pugnas internas que llevó a un nuevo liderazgo, supuestamente alejado de los militares que lo tomaron en la década del 70, a recuperar el prestigio perdido, el cual fracasó finalmente en su propósito.

Desde 1985, el PR se había dividido entre el nuevo liderazgo, encabezado por Mario Fuentes Peruccini, y la facción de dudoso origen, encabezada por el ingeniero José Ángel Lee, quien en esos comicios fraudulentos de 1982, participó como candidato a Alcalde de la Ciudad Capital. El triunfador de esas elecciones, en lo que a la Alcaldía Metropolitana se refiere, fue Alvaro Arzú, quien rehusó tomar el cargo, y en su lugar asumió Lee Duarte, propuesto por los regímenes militares que gobernaron entre 1982 y 1986.

Fuentes Pieruccini acusó a Lee de usar dinero proporcionado por oficiales militares para ganar el control del partido. Durante la convención para nombrar candidato presidencial en 1990, la división se evidenció cuando ambos fueron nombrados como candidatos presidenciales a la contienda electoral de ese año.

El PR desapareció para las elecciones de 1995, cuando la ficha del partido fue vendida al Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG) por parte del entonces Secretario General, Rafael Arriaga Martínez⁵⁷. Incluso, el FDNG llegó a considerar a Lee Duarte como un potencial candidato presidencial.

56 Ver *Inforpress Centroamericana* del 24 de abril de 1998.

57 Arriaga Martínez es hijo de Rafael Arriaga Bosque, quien fuera un militar que ocupó altos cargos dentro del Ejército durante los gobiernos de Arana Osorio, Laugerud y Lucas García.

Entre la comunidad y el Estado: *El rol de la sociedad civil y los partidos políticos en el proceso electoral y la transición democrática*¹

Guatemala está entrando lentamente en la dinámica global de construcción de formas posnacionales y multiculturales de ciudadanía. Pero lo está haciendo en condiciones de enorme desventaja cultural, política y económica. La lista de problemas que deberían convertirse en una agenda política en la presente carrera electoral está, sin embargo, siendo reducida a un mínimo de asuntos de importancia supuestamente compartida entre los/as destinatarios de la oferta política y las organizaciones que, supuestamente, sirven para mediar los intereses entre la ciudadanía y el Estado.

Los problemas tradicionales de pobreza, analfabetismo, insalubridad, desempleo, subempleo e informalidad, falta de vivienda, crisis en el sistema de salud y crisis en el modelo económico agroexportador, han sido complementados por problemas nuevos de seguridad, corrupción masiva, crimen organizado, narcoactividad, secuestros, robos de imágenes religiosas, linchamientos e impunidad en esferas cada vez más amplias y a escalas sin precedentes. Y a pesar de su importancia obvia y urgente, como lo señala el último reporte nacional de desarrollo del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), muchos de estos problemas no están alcanzando la agenda partidaria.

En lugar de simplemente repetir que existe este enorme déficit político en la presente campaña electoral, lo importante es explicarlo. Y las explicaciones más comunes y frecuentemente repetidas por la prensa, centros de investigación, analistas independientes y académicos/as en Guatemala, se refieren ya sea a la famosa crisis de mediación entre la ciudadanía y el Estado que los partidos políticos supuestamente deberían cumplir, o a la cada vez más reducida visión política, debido a una supuesta falta de un "Proyecto de Nación", de los/as líderes políticos.

Lo que no se ha hecho, sin embargo, es ofrecer una explicación normativamente convincente no sólo de por qué no se traducen todos estos problemas en agenda partidaria, por qué el liderazgo político insiste en soslayar los asuntos más centrales de la transición democrática en Guatemala y, finalmente, por qué grandes grupos de gente, aunque no necesariamente grupos mayoritarios, se vuelcan a favor de las ofertas políticas minimalistas de los partidos políticos.

El argumento que ofrezco en el presente artículo se puede resumir del siguiente modo: La crisis de mediación que existe en el sistema partidario guatemalteco y que se está volviendo dolorosamente tangible en la presente campaña electoral, surge de un déficit normativo en la vida cultural y política de

Guatemala, a saber, la ausencia de una ciudadanía reunida en una comunidad democrática capaz de conformarse a sí misma en medio político para el cambio social y con capacidad de acción para intervenir en los problemas más apremiantes que aquejan a la República en la etapa presente de la transición democrática. A esta ausencia ciudadana hay que agregarle, con el mismo nivel de importancia, la ausencia de liderazgos políticos que tomen en serio los principios fundamentales de una forma democrática y discursiva de política y que los desplieguen de modo inclusivo, pluralista y argumentativo en los distintos foros de la esfera pública en transición. La ausencia, tanto de una ciudadanía de este tipo como de un liderazgo político que le corresponda, se está traduciendo, en el presente contexto electoral, no sólo en el resurgimiento de prácticas caudillistas, populistas y clientelistas por parte de los partidos políticos, sino también de un movimentismo supuestamente progresista y democrático por parte de las bases sociales. Ambas formas de política no sólo se complementan sino que también dan expresión a conceptos culturales y políticos, profundamente normativos y jurídicos, en donde, tanto el autoentendimiento de la sociedad como del liderazgo político, se transforman en el concepto de una sociedad que se miente a sí misma y que actúa sobre sí misma sobre la base de una falsa conciencia moral.

A. Crisis de la eticidad convencional

Aunque las desventajas de la República en términos tecnológicos y económicos han sido tratadas con amplitud en otros lados, aquí voy a referirme a otro tipo de desventajas que hasta hoy, y particularmente en el presente contexto electoral, han recibido poca atención en Guatemala. Se trata, sobre todo, de un déficit normativo y de sus implicaciones culturales y políticas.

¿Qué es lo que entendemos aquí por desarrollo moral?

Se trata de la transición normativa que parte de un mundo de la vida, entendido como el mundo de la interacción y comunicación diaria, al interior de familias, entre vecinos/as, en la comunidades rurales y urbanas, en las colonias y barrios marginales y en las ciudades. Este es un mundo orgánico, adscriptivo y vinculante para todos/as, compartido en común por los miembros de una comunidad concreta (por ejemplo, una aldea o un barrio marginal) o abstracta (por ejemplo, un grupo étnico o un segmento de clase o capa social).

En este mundo, los/as sujetos/as se entienden mutuamente a partir de definiciones que hacen de sus situaciones concretas, definiciones que parten de presupuestos compartidos pero nunca

¹ Por Marco Fonseca, Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos; Profesor Adjunto, Departamento de Ciencias Políticas, Universidad de Toronto y Departamento de Ciencias Políticas, Universidad de Guelph.

problematizados. El entendimiento mutuo sobre situaciones concretas ocurre a partir de un proceso comunicativo basado implícitamente en el intercambio de nociones del mundo objetivo, el mundo social y el mundo subjetivo que la gente comparte y asume como evidentemente válidas. Nadie entabla procesos de interacción y comunicación circunstancial o diaria asumiendo que los marcos normativos y las nociones del mundo que subyacen a dichos procesos, van a ser cuestionadas, ya sea por los/as hablantes o por los/as oyentes. Si así fuera no habría posibilidad de llegar a acuerdos básicos en la vida diaria y no habría chance de coordinar la acción y la vida. Basta un ejemplo simple para ilustrar este argumento.

El papá manda a su hijo más joven a comprar cigarros a la tienda y le pide que se apure y que le traiga el vuelto. Aquí, tanto el papá como el hijo más joven, uno de cuatro, tienen clara la situación: la proximidad de la tienda, el hecho de que no se manda a las hijas a la calle muy tarde en la noche, el precio de los cigarros, el valor de la moneda. El *fin* de la acción también está claro, es decir, ir a comprar los cigarros. El plan de la acción y la autoridad del papá para mandar a su hijo más joven a comprar cigarros también está claro, y el solo estatus y autoridad del papá es suficiente, bajo circunstancias patriarcales normales, para conseguir la obediencia del hijo. Este marco normativo no está bajo cuestión.

Ahora bien, si la situación cambia para uno de los actores, por ejemplo, el hijo también quiere comprar sus propios cigarros pero no tiene ni edad, ni dinero ni permiso; si el fin se ve alterado por la intervención de terceros actores o circunstancias imprevistas, por ejemplo un accidente, y si el marco normativo se ve cuestionado, por ejemplo: el hijo menor aprendió en la escuela que fumar causa cáncer, que como ser humano y persona razonable puede cuestionar el mandato de su padre en este caso concreto, etc., entonces el trasfondo de la interacción se podría ver alterado, quizás radicalmente alterado y algunos, sino todos, los conceptos del mundo que subyacen a la misma se podrían ver igualmente alterados y quizás entrar en una crisis de legitimidad.

El modelo patriarcal mismo de familia podría verse cuestionado si por lo menos uno de los actores, el actor subordinado, decidiera formular interrogantes acerca del marco normativo que subyace a las interacciones tradicionalmente normales entre padres, no madres, e hijos/as. *“En cierto modo, el mundo de la vida al que los participantes en la interacción pertenecen, está siempre presente; pero sólo a la manera de (o suministrando el) trasfondo de una escena actual. En cuanto tal plexo de remisiones queda incluido en una situación, en cuanto se torna en ingrediente de una situación, pierde su trivialidad y su solidez incuestionada.”*².

Este es, pues, el tipo de interacción y comunicación que se da en el mundo de la vida en las aldeas, caseríos, comunidades, barrios,

colonias y vecindarios de las ciudades, aunque los marcos normativos son distintos dependiendo de las tradiciones culturales y políticas de cada uno de estos contextos concretos.

Lo que Habermas llama *plexos de remisiones* derivan de relaciones gramaticalmente reguladas que se dan entre los elementos de un acervo de saber organizado por distintos lenguajes culturales y políticos. Aparte de los lenguajes naturales, los lenguajes culturales y políticos también son constitutivos del mundo de la vida y, tal y como ocurre con los conceptos del mundo que subyacen a toda situación que emerge en la vida diaria, los lenguajes culturales y políticos se mantienen como medio no reflexivo para alcanzar el entendimiento mutuo. La gente no puede simplemente salirse de esos lenguajes y adoptar un punto de vista extramundano, como tampoco puede salirse simplemente de los patrones sociales que se transmiten por medio de esos lenguajes.

Al mismo tiempo, estos lenguajes sirven para conservar y reproducir el contenido de las tradiciones comunitarias que sólo pueden tener existencia en forma simbólica y transmitirse de manera lingüística. El saber que hacen posible los lenguajes culturales y políticos también provee a los/as “vecinos” o “ciudadanos” en comunicación, convicciones normativas profundas y generalmente aproblemáticas. Los lenguajes culturales y políticos proveen a estos participantes, interpretaciones ya acabadas e incuestionadas de las conexiones que pueden o deben existir entre los mundos objetivos, sociales y subjetivos. Estos lenguajes culturales y políticos, no siendo lo mismo que el mundo de la vida, sí proveen los marcos categoriales que sirven para clasificar, organizar y coordinar situaciones necesitadas, de acuerdo que puedan emerger cuando algo, cualquier cosa, se torna problemática en la vida diaria de la gente. Cuando los/as actores se reconocen y entienden mutuamente sobre la base de estos conceptos articulados por medio de la gramática de lenguajes culturales y políticos, también *“están participando simultáneamente en interacciones a través de las cuales desarrollan, confirman y renuevan lo mismo su pertenencia a los grupos sociales que su propia identidad”*³.

En tanto que las estructuras del mundo de la vida *“fijan las formas de la intersubjetividad del entendimiento posible”*, los lenguajes culturales y políticos sirven para clasificar, organizar y coordinar todas aquellas situaciones que por alguna razón se vean en la necesidad de ser validadas o legitimadas, así como para renovar la identidad de los/as actores/as⁴. De manera complementaria, el aprendizaje lento de formas alternativas de lenguaje cultural y político puede resultar en la invalidación y deslegitimización de situaciones comúnmente aceptadas como normales, y de mundos de la vida que se han tornado problemáticos.

Y es precisamente el desarrollo de formas nuevas de lenguaje cultural y político que han tenido como trasfondo cambios

2 Jürgen Habermas, *Teoría de la acción comunicativa*, II. *Crítica de la razón funcionalista*, Madrid: Taurus, p. 176.

3 Habermas, op. cit. p. 198.

4 Habermas, op. cit., p. 179.

sociales, políticos y económicos a nivel nacional e internacional, los que han ocasionado un desarrollo de tipo moral y la transición a formas nuevas de conciencia cultural y política. Este cambio ha ido de formas orgánicas, ascriptivas y tradicionales de vida, a formas de vida asumidas de manera reflexiva y pluralista que hacen imposible la justificación pública (es decir, con el objeto de coordinar y regular la vida cultural y política general), de cualquier concepción del mundo, desde perspectivas tradicionales, metafísica o trascendentales.

En tanto que los mundos convencionales pueden todavía apelar a la autoridad de la tradición, de la religión, de la costumbre, de la familia, de la etnia, de la comunidad, etc., en suma, a formas de eticidad concreta articulados con lenguajes tradicionales para fundamentar y justificar el punto de vista moral, los mundos posconvencionales, posmetafísicos y pluralistas sólo pueden reconstruir el punto de vista moral desde una perspectiva intramundana, es decir, *“dentro de los límites de nuestro mundo intersubjectivamente compartido”*, a la luz de lenguajes culturales y políticos diferenciados, reflexivos y en base a formas democráticas de política⁵.

En este sentido, en la medida en que los actores comienzan a entablar formas de entendimiento y reconocimiento mutuo basados en sus propios términos y esfuerzos, y no en formas preinterpretadas, el mundo de la vida también empieza a diferenciarse, los conceptos del mundo objetivo, social y subjetivo empiezan a desglosarse, las situaciones empiezan a ser definidas de manera autónoma, y la personalidad cultural y política de la gente empieza a definirse a partir de competencias recientemente adquiridas, que capacitan a la gente para tomar parte en procesos discursivos y para afirmar en los mismos su propia identidad, sus propias tradiciones, sus fines y sus ideales.

La transición normativa desde mundos tradicionales o convencionales a mundos justificados democráticamente, tiene que atravesar muchos obstáculos y trae consigo muchos problemas. Uno de estos problemas, si es que no es el problema central, consiste en saber cómo, una vez se han abandonado los principios incuestionables, los tabúes culturales, políticos y económicos y las formas sacras, religiosas y espirituales de consenso social, se pueden fundamentar las normas y los valores democráticos de manera que tengan validez moral y fuerza cultural y políticamente vinculante.

En los mundos tradicionales y convencionales, la validez moral provenía de la incuestionabilidad de las normas tradicionales, religiosas o metafísicas, y de las interpretaciones que de dichas normas hacían los liderazgos culturales y políticos; en los mundos posconvencionales y posmetafísicos, sin embargo, ya no existen y no pueden existir dichos mantos de incuestionabilidad o dichas interpretaciones absolutas ya acabadas. En tanto que las justificaciones ontológicas apelan a la sabiduría de textos

sagrados, de tradiciones ancestrales y desde tiempo inmemorial, a convenciones familiares, de etnia, de clase y de nación, no sólo para fundamentar el estatus quo sino también para anticipar y creer en su destino, el mundo diferenciado de sociedades posconvencionales, pluralistas y en proceso de transición democrática, tiene que buscar la justificación en la cantera de la argumentación democrática pública.

Aunque esto no significa que los/as individuos/as ya no puedan continuar con sus propias tradiciones comunitaristas, porque de hecho sí pueden y quizás hasta deban hacerlo, ello sí significa que las mismas ya no pueden imponerse, ni a nivel local y mucho menos a nivel público general, sin la fuerza vinculante de los mejores argumentos y sin la mediación de un principio discursivo democrático. Valga decir aquí que la fundamentación posmetafísica de los principios o programas que habrán de regularlos democráticamente no es sólo, ni mucho menos, tarea de la filosofía moral sino también de los liderazgos políticos con intenciones democráticas. De hecho, esto es un reto fundamental del presente momento electoral en la transición democrática guatemalteca, reto que no ha sido asumido de manera explícita por el liderazgo político actual.

La importancia de la transición normativa que he apuntado arriba y de los principios que han de regular nuestra vida política en común, ha sido destacada no solo por filósofos políticos en la tradición de la Teoría Crítica como Jürgen Habermas, sino también por filósofos de liberalismo político como John Rawls. Para este último, la problemática que desencadena una transición moral similar a la que aquí nos ocupa, debe iluminarse a partir de una conjetura central que él llama la conjetura de la “posición original”.

De acuerdo a Rawls *“cuando preguntamos cuáles son los principios mas razonables de la justicia política para una democracia constitucional, cuyos ciudadanos son considerados como libres e iguales, razonables y racionales, la respuesta es que estos principios vienen dados por un mecanismo de representación en el cual las partes racionales, entendidas como fideicomisos de ciudadanos, uno por cada ciudadano, están situados en condiciones razonables y limitados por estas condiciones de modo absoluto”*⁶.

De acuerdo a Rawls, el mecanismo de la “posición original”, en una sociedad ya diferenciada, pluralista y con cultura e instituciones democráticas, sirve también para generar lo que él llama un “consenso entrecruzado” que sirve para coordinar múltiples “doctrinas comprensivas” y múltiples concepciones de lo bueno. El entrecruzamiento exitoso de estas doctrinas, según Rawls, resulta en lo que él llama “justice as fairness”. Basado en este modelo de justicia cultural y política, Rawls puede decir que, en los términos peculiares de la segunda persona del plural, de un “nosotros”, *“como ciudadanos de esta sociedad hemos*

5 Habermas, *La inclusión del otro. Estudios de teoría política*. Barcelona: Paidós, 1999, p. 33.

6 John Rawls, “Réplica a Habermas,” en Jürgen Habermas y John Rawls, *Debate sobre el liberalismo político*, Barcelona: Paidós, 1998, pp. 84-85. Ver también su *Political Liberalism*, Nueva York: Columbia University Press, 1993, pp. 22-28 y 133-172.

*alcanzado la más profunda y razonable base de unidad social, alcanzable para nosotros en tanto que ciudadanos de una moderna sociedad democrática*⁷.

Aquí solo puedo apuntar dos objeciones rápidas al argumento de Rawls. Primero, que la transición que a mi me preocupa en este artículo, está ocurriendo en el presente guatemalteco y no en el pasado político de la comunidad republicana a la que pertenece Rawls y que, por cierto, Rawls ha idealizado y romantizado. Segundo, que de ninguna manera podemos dar por supuesto que Guatemala ya cuenta con una ciudadanía razonable, capaz de entrar en un proceso de formulación de un consenso entrecruzado entre doctrinas comprensivas, porque en el contexto guatemalteco, éstas son tareas por cumplir y no tareas ya cumplidas. Los presupuestos sociológicos del liberalismo político rawlsiano, el tipo de mundos de la vida que él toma por supuesto, son, por lo tanto, inadecuados como punto de partida analítico para entender la transición democrática y las luchas culturales y políticas en Guatemala, aunque no sea así el caso de su filosofía política en general.

B. Hacia la ciudadanía multicultural

En Guatemala, la reacción que ha causado la transición normativa de mundos convencionales a mundos pluralistas posmetafísicos, tiene varios matices concretos y sus correspondientes propuestas políticas.

Por un lado tenemos el comunitarismo tradicional y sus reivindicaciones ontológicas revestidas de argumentos culturalistas, étnicos y orgánicos. Por otro lado tenemos varias formas de autoritarismo tradicional y sus propuestas moralizantes de mano dura. Finalmente, entre estas dos propuestas se encuentra una tercer propuesta todavía poco desarrollada en Guatemala, a saber, la propuesta de una ciudadanía multicultural y democrática que ha nacido no sólo desde los escombros que nos dejó la violencia revolucionaria y contrarrevolucionaria, sino también de más de medio siglo de diferenciaciones culturales y políticas. A la luz de este análisis, ya no es posible reducir las opciones culturales y políticas en la escena electoral presente a las viejas categorías de “derechismo,” “centrismo,” o “izquierdismo.” Aunque estas categorías políticas no han perdido todo su valor heurístico, las mismas se han tornado insuficientes para clasificar y entender las distintas formas del accionar cultural y político en la Guatemala presente. Como ejemplo de las confusiones a las que llevan el continuo uso acrítico de estas categorías, tenemos el argumento muchas veces repetido en la esfera pública guatemalteca a efecto de que, por ejemplo, el riosmontismo refleja una corriente “izquierdo-derechista” en el espectro electoral guatemalteco. En cualquier caso, los lenguajes culturales y políticos que aquí identifico, sí pueden servirnos para clasificar los discursos de los partidos políticos y para anticipar el tipo de

políticas públicas que, una vez en el gobierno, van a desplegar ante la población.

El comunitarismo tradicional

El comunitarismo tradicional es una forma de lenguaje cultural y político que ha surgido en Guatemala en las últimas dos décadas. En tanto que lenguaje cultural y político, es uno de los sucesores, pero también uno de los competidores actuales, tanto del lenguaje de la revolución que en gran parte hegemonizó el autoentendimiento de los movimientos campesinos, populares y, por supuesto, revolucionarios desde 1954 hasta 1984, como del neocomunitarismo que se ha forjado a partir del discurso de los derechos humanos entre activistas indígenas como Rigoberta Menchú Tum y Rigoberto Quemé.

En su forma indígena, el comunitarismo tradicional pone el énfasis en comunidades corporativas supuestamente constituidas de manera pre política, reproducidas de manera fundamentalmente ritual y legitimadas a partir de una tradición con raíces, tanto en el tiempo inmemorial, en la cultura de resistencia y supervivencia generada en la Colonia, en las prácticas consuetudinarias cuidadosamente vigiladas por la presencia continua, en montañas, valles y cuevas, de los/as ancestros/a, como el estatus dentro de la jerarquía civil-religiosa de las principales autoridades comunitarias.

Para el comunitarismo tradicional indígena, la condición de etnia no es sólo o de manera mas importante una condición biológica sino, antes bien, una condición lingüística, cultural y política definida a partir del mantenimiento de características colectivas comunes que van desde la organización familiar, formas de vestir, formas de dialecto y de discurso, hasta formas específicas de vida cultural, religiosa y política definidas a partir de ritos públicos, fiestas conmemorativas y ceremonias públicas en torno a la agricultura y la historia comunal. Para el comunitarismo tradicional, una vida buena consiste, entonces, en una vida realizada dentro de los patrones culturales, políticos y económicos que consolidan una comunidad étnico-lingüística y que la reproducen de modo adscripto y consensuado pre políticamente.

Estos elementos del comunitarismo tradicional indígena son elementos fundamentales de lo que se ha venido a conocer en la Guatemala de hoy como Pan-mayanismo⁸. Aquí es preciso hacer una diferenciación importante. Mi argumento no es que sólo las comunidades indígenas respondan a los patrones culturales y políticos del comunitarismo tradicional. Más bien, mi argumento es que el lenguaje del comunitarismo tradicional está constituido a partir de una eticidad, y que los términos y la conjugación de la misma en el discurso comunitarista, obtiene el carácter, tanto de una gramática como el de un proyecto cultural y político. Entre los intelectuales principales de esta forma de

7 Rawls, “Réplica a Habermas”, p. 95.

8 Sobre el movimiento Pan-mayanista en Guatemala, ver el trabajo de Edward F. Fischer y R. McKenna Brown, *Maya Cultural Activism in Guatemala*, Austin: University of Texas Press, 1996; Alberto Esquit y Víctor Gálvez Borrell, *The Mayan Movement Today: Issues of Indigenous Culture and Development in Guatemala*, Guatemala: FLACSO, 1997; Kay B. Warren, *Indigenous Movements and Their Critics: Pan Mayan Activism in Guatemala*, Princeton: Princeton University Press, 1998; Santiago Bastos y Manuela Camus, *Entre el mecapan y el cielo. Desarrollo del movimiento maya en Guatemala*, Guatemala: FLACSO-Cholsamaj, 2003.

comunitarismo indígena se pueden mencionar, por ejemplo, al Dr. Demetrio Cojtí Cuxil, el actual Viceministro de Educación del gobierno riosmontista de Alfonso Portillo⁹.

El comunitarismo tradicional contemporáneo se plantea definir y dominar los discursos en donde la forma del entendimiento y reconocimiento mutuo de la gente parte de mundos de la vida orgánicos y de marcos normativos y categoriales ya interpretados, totalizadores y aporreados.

En el caso del comunitarismo tradicional indígena, Santiago Bastos y Manuela Camus, aunque no emplean la terminología que se usa en este artículo, sí identifican un discurso dentro del “movimiento maya” al que denominan “culturalista.” De acuerdo a estos autores, el esencialismo de los “mayas culturalistas” atraviesa por una crisis. *“Por una lado, a los ‘mayas culturalistas’, estos años de introducirse a la política nacional y estatal les ha llevado a reconocer la pluriculturalidad del país, de las políticas y de los actores nacionales, desde donde tienen que negociar las especificidades: la misma realpolitik obliga a relativizar las posiciones mas extremas. Por otro, el ‘modelo mayista’ de la comunidad armónica y el retorno a las enseñanzas de los ancestros, no gana suficientes adeptos y cada vez se encuentra más alejado de las realidades que se viven en las comunidades. Como plantea Edgar Esquit, historiador kaqchikel, ‘quizá uno de los desaciertos es haber dado por hecho, haber imaginado, que el Pueblo Maya existe como tal, ahora y en el pasado, y con esto restarle importancia a la idea de proceso,’ descuidando esos enlaces entre la diversidad social, religiosa, económica que viven los mayas”*¹⁰.

Por mucho que el discurso de los “mayas culturalistas” esté rodeado de una crisis de las comunidades realmente existentes, los liderazgos políticos al interior de éstas no están descansando en sus esfuerzos por renovar formas tradicionales de eticidad y en establecer alianzas similares a las que existieron entre elites locales y elites nacionales en los siglos diecinueve y veinte¹¹.

Si bien lo que ha venido a llamarse “culturalismo maya” es una de las expresiones del comunitarismo tradicional, éste último no se reduce al primero. El comunitarismo tradicional es más difuso, más general y más insidioso. Muchas de sus características definitorias se pueden encontrar, tanto en comunidades indígenas como en aldeas y pueblos ladinos, tanto en parajes del interior

de la República como en colonias y barrios marginales de la Ciudad Capital.

En la Ciudad Capital, por ejemplo, el comunitarismo tradicional reviste la forma de una cultura y política pre industrial, en el sentido que los historiadores E. P. Thompson y George Rudé le dan a estos términos, que reproduce patrones tradicionales de entendimiento y comunicación¹². Lo que Thompson llama “plebe”, en lugar de clase obrera, más o menos corresponde a lo que en Guatemala nosotros llamamos “pueblo”, y lo que el historiador inglés llama “la economía moral de la multitud” es lo que yo llamo, en contextos urbanos, el comunitarismo tradicional. De acuerdo a Thompson, la economía moral *“no puede ser descrita como ‘política’ en ningún sentido progresista, tampoco puede, no obstante, definirse como apolítica, puesto que supone nociones del bien público, categórica y apasionadamente sostenidas, que, ciertamente, encontraban algún apoyo en la tradición paternalista de las autoridades; nociones de las que el pueblo, a su vez, se hacía eco tan estrepitosamente que las autoridades eran, en cierta medida, sus prisioneros”*¹³.

En el caso de Guatemala, es fácil reconocer que esta economía moral urbana se esconde detrás de muchas formas de protesta popular, y que también tiñe con mucho el carácter del gobierno y pensamiento del riosmontismo y otras expresiones de autoritarismo tradicional y patrimonialismo contemporáneo. Entre este tipo de “pueblo” y expresiones autoritarias de gobernabilidad, existe un consenso acerca del llamado “bien común” que, en el contexto electoral presente, por ejemplo, sostiene el discurso aparentemente clasista del riosmontismo. El modelo paternalista que subyace al autoritarismo tradicional, a su vez, recurre a una especie de contrato social con la plebe urbana que se reproduce, implícitamente y sin cuestionamientos, en un *“cuerpo desgastado de ley estatuida”* así como en *“el derecho consuetudinario y las costumbres”*¹⁴.

Uno de los momentos más importantes, pero por supuesto no el único, en que se manifiestan características importantes de las costumbres locales referidas aquí como comunitarismo tradicional es, precisamente, el momento electoral, cuando cambios o crisis en las prácticas de los mercados locales pueden recibir expresión pública y, quizás alguna promesa política de corrección. En este contexto, la gente no percibe el

9 Como ejemplos teóricos del comunitarismo tradicional, ver Demetrio Cojtí Cuxil, *El movimiento maya (en Guatemala)*, Guatemala: Editorial Cholsamaj, 1997; *Configuración del pensamiento político del pueblo maya* (2da. Parte), Guatemala: Editorial Cholsamaj, 1995; *Políticas para la reivindicación de los mayas de hoy*, Guatemala: Editorial Cholsamaj, 1994.

10 Bastos y Camus, *Entre el mecapan y el cielo*, p. 311.

11 Para un análisis de las alianzas entre líderes indígenas de Quetzaltenango y elites nacionales en la Ciudad Capital, ver el trabajo de Arturo Taracena Arriola, *Invencción criolla, sueño ladino, pesadilla indígena. Los Altos de Guatemala: De región a Estado, 1740-1871*, Guatemala: CIRMA, 1997. Grez Grandin ha hecho una aplicación de este análisis al caso particular de las comunidades indígenas de Quetzaltenango y sus líderes culturales y políticos en el siglo diecinueve después de la independencia. Ver Greg Grandin, *The Blood of Guatemala. A History of Race and Nation*, Durham y Londres: Duke University Press, 2000. Para una discusión mas amplia y comprensiva de las “relaciones étnicas” en Guatemala en la segunda mitad del siglo veinte, ver Richard Adams y Santiago Bastos, *Las relaciones étnicas en Guatemala, 1944-2000*, Guatemala: CIRMA, 2003.

12 Ver E. P. Thompson, *Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*, 2da. Edición, Barcelona: Editorial Crítica, 1984; George Rudé, *Protesta popular y revolución en el siglo XVIII*, Barcelona: Editorial Ariel, 1978.

13 Thompson, op. cit., p. 66.

14 Thompson, op. cit., p. 71.

encarecimiento del pan, la subida en los precios de la leche y la carne, los cambios en las tarifas de energía eléctrica y el transporte urbano y la falta de caminos, alumbrado eléctrico, agua potable, escuelas, vivienda y/o tierras como asuntos puramente económicos o sujetos a una racionalidad exclusivamente económica, o como factores cuya oferta y demanda deba responder exclusivamente a la lógica del mercado. De hecho, la gente los percibe como parte de la configuración normativa, los mundos de la vida diaria, en la que están insertos esos bienes y servicios primarios y que, como tal, responde a nociones de derechos, libertades y oportunidades independientes de la economía del mercado y muchas veces en contra de las ideologías de moda que prevalecen en el sector privado y sus personalidades y asociaciones representativas¹⁵. Aunque pueda ser entendido en términos de una contradicción de clase, también puede ser entendido como desacuerdos normativos en términos de la economía moral.

Cuando hay alteraciones injustificadas o imprevistas de estos bienes y servicios primarios, la gente, el pueblo, las plebes urbanas y rurales, el llamado “sector popular”, tanto formal como informal, se sienten profundamente desoídos y desamparados y se vuelcan a las calles en protesta popular y haciendo uso de toda medida de hecho directa habida y por haber, con el objetivo de restaurar la economía moral de los bienes y servicios primarios que se han visto afectados. De igual modo, las formas de liderazgo político normativamente vinculadas a este comportamiento popular, partidos políticos populistas, clientelistas, patrimonialistas y autoritarios, se esfuerzan por dar respuesta a estos clamores en los términos propios de la economía moral tradicional, con promesas electorales que, las más de las veces, serán incumplidas, incluso dentro de los términos propios de la economía moral tradicional. Ésta es, seguro, una dinámica electoral fundamental.

Aunque este comportamiento puede y debe analizarse en términos de la economía política, los discursos que la gente emplea para demandar, en sus propios términos, la restauración de lo justo (lo que Rawls llama “fairness”), discursos que en pocas ocasiones se definen a partir de criterios mercantiles o político-económicos, muchas veces parten de lo que Thompson llama “modelos tradicionales de respuesta a la escasez”¹⁶.

La gente continua entendiendo la justicia distributiva e incluso la democracia misma, en términos de y como mecanismo para una distribución de bienes y riqueza y no, como lo argumenta Sen, en términos del desarrollo de capacidades y la creación de oportunidades¹⁷. Estos modelos tradicionales de respuesta y protesta, están en la base de lo que en este artículo llamamos movimentismo populista y de propuestas políticas paternalistas que, sobre todo, en tiempo de contienda electoral, les hacen eco.

De allí que no sea difícil para un partido político como el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), articular un discurso de salarios mínimos, control de precios y obras públicas perfectamente enmarcado dentro de los parámetros de una economía moral tradicional, y articulado con los términos urbano-populares supuestamente antilolibarales. Lo mismo se puede decir del discurso de seguridad pública que ha empezado a esgrimir tardíamente, tanto el Partido de Avanzada Nacional (PAN) como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Finalmente, esa es la lógica que anima las promesas electorales hechas por el candidato presidencial de la coalición GANA, Oscar Berger, cuando habla de construir autopistas, un anillo metropolitano, un nuevo aeropuerto y la posibilidad de reducir los impuestos. Es claro que este discurso apela a un segmento distinto de la población urbana, del que apelan los discursos del FRG, el PAN y la UNE, pero los presupuestos normativos son similares.

Estos son, pues, algunos de los distintos matices que adquiere en Guatemala el comunitarismo tradicional combinado con formas de autoritarismo, populismo y patrimonialismo contemporáneo. Lo que se llama “culturalismo maya” es, pues, solo una articulación política del comunitarismo tradicional pero no la única. Este último, en cambio, es una forma de lenguaje cultural y político más general que conjuga términos y conceptos centrales referidos al mundo objetivo, social y subjetivo, y que están enraizados en mundos de la vida compartidos en común al interior de comunidades indígenas y ladinas, rurales y urbanas, caseríos y asentamientos urbanos, y que de ningún modo refleja la experiencia exclusiva de grupos oprimidos, excluidos y/o explotados. Es bien posible que un Ríos Montt, un Alvaro Colom, un Leonel López Rodas se entiendan a sí mismos en los términos tradicionales del comunitarismo tradicional.

15 La noción de “bienes y servicios primarios” es común en la económica política del desarrollo contemporánea. Como ejemplo de ello, ver el trabajo de Amartya Sen, *Development as Freedom*, Nueva York: Alfred A. Knopf, 1999, pp. 72-75; *Inequality Reexamined*, Nueva York: Harvard University Press, 1992, pp. 79-84. Pero esta noción también es ampliamente discutida en la filosofía política contemporánea. Por ejemplo, desde su *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, pp. 90-95 hasta su *Political Liberalism*, op. cit., pp. 178-190, John Rawls ha venido discutiendo y afinando su noción de los bienes primarios como componente central de su propuesta liberal para una “sociedad bien ordenada.” En *Political Liberalism*, en parte respondiendo a las observaciones críticas de Sen, Rawls nos ofrece una “lista de bienes primarios” que incluye los cinco elementos siguientes: a) derechos y libertades básicas, b) libertad de movimiento y libertad para escoger la ocupación en un contexto de oportunidades diversas, c) poderes y prerrogativas de oficina y posiciones de responsabilidad en las instituciones políticas y económicas de la estructura básica, d) ingreso y riqueza, y finalmente, e) las bases sociales del auto respeto. A esta lista de bienes primarios, Rawls le hace una calificación del siguiente modo: “Una característica básica de una sociedad bien ordenada, es que existe un entendimiento público no solamente acerca de las clases de demandas que los/as ciudadanos/as pueden apropiadamente hacer cuando surgen cuestiones de justicia, sino también un entendimiento público acerca de cómo han de sustentarse dichas demandas. Una concepción política de la justicia provee las bases de dicho entendimiento y de ese modo le permite a los/as ciudadanos/as alcanzar un acuerdo cuando evalúan sus varias demandas y determinar su peso relativo” (p. 179, traducción nuestra). Sin embargo, los presupuestos sociológicos de lo que Rawls llama una “sociedad bien ordenada”, requieren de mundos de la vida lo suficientemente diferenciados como para sustentar formas de conciencia moral y política, que le den peso y legitimidad a los procedimientos que Rawls nos ofrece para solventar nuestros conflictos alrededor de bienes y servicios primarios, y el marco normativo dentro del cual éstos han de percibirse y entenderse.

16 Thompson, op. cit., p. 85.

17 Sen, *Inequality Reexamined*, p. 81. De acuerdo a Sen: “En la evaluación de la justicia basada en las capacidades, hay que evaluar las demandas individuales no en términos de los recursos o bienes primarios que poseen las personas respectivamente, sino por las libertades de que realmente disfrutan para escoger las vidas que tienen razón para valorar” (p. 81, traducción nuestra).

En este sentido, el comunitarismo tradicional representa, tanto una forma de reconocimiento y entendimiento mutuo entre mucha gente, una economía moral que trasciende fronteras de etnia, clase y género, así como una forma de definir a partir de los conceptos que proporciona este discurso, implícitas y no problematizadas, situaciones concretas que pueden haber resultado problematizadas. Y al mismo tiempo que hace esto, el comunitarismo tradicional también crea, recrea y legitima identidades y prácticas culturales y políticas orgánicas, matizadas a su vez por cuestiones de etnia, clase y género, que perpetúan una cultura política convencional, una cultural política no democrática.

Pero en dondequiera que mundos de la vida orgánicos se encuentren bajo amenaza y estos marcos se revelen como insuficientes para acomodar la diversidad, pluralidad y complejidad de un mundo cambiante y en crisis, el comunitarismo tradicional se torna ortodoxo y autoritario. Formas de comunidad corporativa, de mozos colonos y de vecinos, comunidades basadas en la pertenencia étnica o en la solidaridad de clase, ya tienen rato de haber entrado en crisis pero la violencia revolucionaria y contrarrevolucionaria de los años sesentas a los años ochentas, aceleró la misma y desencadenó procesos de diferenciación cultural y política que han tornado los mundos de la vida y formas de economía moral tradicionales en mundos problematizados¹⁸.

En reacción a esto, el comunitarismo tradicional indígena, por ejemplo, pretende restaurar la autoridad de lo tradicional por medio de una defensa de los principios prepolíticos que supuestamente subyacen a las comunidades étnicas en forma de derecho consuetudinario y de sabiduría de los/as ancianos/as, y propone desplegarlos una vez más para engarzar la voluntad de la gente que se ha quedado en sus comunidades, parajes, aldeas, pueblos, fincas, barrios y/o vecindades o la gente que, después de los enormes desplazamientos ocasionados por la guerra, ha regresado de nuevo para vivir en sus comunidades, zonas rurales, parajes y vecindades cultural y políticamente tradicionales. El autoritarismo tradicional también responde de una manera similar.

Algo similar ocurre con el comunitarismo tradicional ladino, el vecinazgo ladino, en donde la economía moral tradicional se

justifica, también de manera prepolítica, sobre la base de un vecinazgo con raíces preindustriales, pero con alusión a la herencia del Estado patrimonial-autoritario e, incluso y paradójicamente, a la herencia social, no así a la herencia política, que nos dejó la Primavera Guatemalteca¹⁹. Aunque después de la guerra revolucionaria y contrarrevolucionaria, mucha de esta gente haya retornado a sus comunidades con la idea de reconstruir sus identidades tradicionales de manera participativa, lo que no siempre es el caso, el comunitarismo tradicional les responde con lo que Rawls llama “doctrinas comprensivas” ya acabadas y en lo esencial, fuera de cuestionamiento.

Pero el comunitarismo tradicional en Guatemala está en crisis debido, entre otras cosas, a una serie de desarrollos culturales, políticos y económicos que ocurrieron durante el siglo XX y que han desatado formas de comportamiento, conciencia morales y discursos que, hasta tiempos recientes, habían logrado coordinar la integración social de la gente en sus comunidades, habían logrado mantener la obediencia de la gente a sus tradiciones y, finalmente, habían logrado restringir formas extremadas y disfuncionales de protesta en aquellos casos en que el “contrato social” entre las comunidades y el Estado se viera sometido a crisis. Hasta tiempos muy recientes, cosmovisiones tradicionales, tradiciones e instituciones religiosas, leyendas y mitos de varios tipos, tabúes, ideas religiosas y otros frenos éticos de origen colonial, medieval y premoderno, discursos colectivistas y orgánicos, habían logrado coordinar y estabilizar la conducta diaria de la gente, sus relaciones de reconocimiento mutuo y sus modelos de resolución de conflictos. Aunque grupos dominantes se han comportado tradicionalmente en Guatemala de manera coercitiva y represiva, y la guerra revolucionaria y contrarrevolucionaria elevó estas prácticas a un nivel sin precedentes, la ética de la prudencia que generalmente guió la conducta política de las comunidades rurales y las plebes urbanas, ha entrado también en crisis y ha dado lugar a una explosión social, cultural y política sin precedentes.

En ausencia de una eticidad que fomente el respeto endógeno y la prudencia exógena, surgen formas incontrolablemente coercitivas y violentas de resolución de conflictos. A partir de aquí, los conflictos intrafamiliares, entre los llamados “vecinos” y entre las comunidades se resuelven, casi todos en primera instancia, sobre la base de la intimidación, las amenazas, la

18 Este proceso violento de transformación de comunidades tradicionales y de surgimiento de nuevas formas de ciudadanía fue examinado en un número anterior de este boletín. Ver mi contribución “Ciudadanía, sociedad civil y elecciones en Guatemala”, *El Observador Electoral* No. 2, abril 2003, pp. 12-22, especialmente pp. 12-14. También he ofrecido un argumento más detallado de la crisis del comunitarismo tradicional indígena en mi ponencia titulada “Between Reconstruction and Globalization: Civil Society and Democratic Politics in Guatemala”, presentada durante la conferencia internacional de la Latin American Studies Association (LASA) en marzo del 2003 en Dallas, Texas. Esta ponencia está a disposición del público en el siguiente sitio de Internet de LASA: <http://lasa.international.pitt.edu/Tracks2003/SMO.htm>.

19 Para un análisis muy sugerente del Estado patrimonial-autoritario y la herencia que nos ha dejado, ver el trabajo de Miguel Ángel Reyes Illescas, *Patrimonialismo y participación. Del control del Estado a la lucha de los pueblos: Guatemala 1970-1998*, Guatemala: FLACSO, 1998. La discusión sobre el desarrollo de la ciudadanía más fructífera y estimulante que hasta hoy he leído en Guatemala, puede encontrarse en el trabajo de Arturo Taracena, et. al., *Etnicidad, estado y nación en Guatemala, 1808-1944*, Guatemala: CIRMA, 2002, pp. 141-206. Ahora bien, la idea de que comunidades ladinas en Guatemala, y hasta cierto punto comunidades indígenas también, están normativamente organizadas de acuerdo a los patrones culturales y políticos del vecinazgo, lo que yo denomino precisamente como comunitarismo, es una idea todavía en proceso de desarrollo en Guatemala. Ciertamente, Taracena detecta cómo en el siglo diecinueve, varios textos constitucionales ya hacen juego de palabras con los conceptos de “habitantes” y “ciudadanos” (*Etnicidad, estado y nación*, p. 171), pero me parece que el distinguido historiador guatemalteco no lo explora en los términos de una tradición del vecinazgo. La idea de vecinazgo como forma orgánica de ciudadanía, la he tomado prestada del trabajo de un grupo de historiadores/as y teóricos/as sociales latinoamericanistas que incluyen a Hilda Sabato, François-Xavier Guerra, Antonio Annino, José Carlos Chiaramonte, Carlos A. Forment, Marcello Carmagnani y otros/as. Como ejemplo de su trabajo, ver Hilda Sabato (Coordinadora), *Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina*, México: El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica, 1999. Historiadores guatemaltecos como Taracena también están empezando a conceptualizar la construcción histórica de la ciudadanía en Guatemala en los términos planteados por algunos de estos autores/as. Ver Taracena, op. cit., p. 28, nota 10.

coerción y/o la violencia. Tanto los linchamientos y destrucción de estaciones policiales como el robo creciente de imágenes religiosas, tanto el exitoso y aterrador surgimiento de “las maras” como la expansión del crimen generalizado, tanto la generalización de la narcoactividad como forma de vida y empleo, así como la proliferación de los secuestros bien planeados y relampagueados, tanto los macheteos entre comunidades del altiplano y la toma de puertos por comunidades de pescadores en la costa sur son, en mayor o menor parte, instancias de una crisis de la eticidad tradicional combinada, claro está, con una crisis en el sistema económico y el modelo de Estado, y con el impacto insoportable de un proceso de globalización totalmente fuera del control local²⁰.

Hay poca conciencia moral y menos aun voluntad política de recurrir a instituciones judiciales de la municipalidad o de la República para litigar las diferencias, los conflictos y los problemas. Y esto no sólo se debe a la crisis del modelo de Estado que no termina de surgir de la transición democrática, sino también al hecho de que la gente de varios estratos sociales, simplemente, no reconoce la legitimidad de las instituciones que no acaban de surgir de la transición, pero tampoco reconocen la legitimidad de las normas tradicionales. En tanto que la falta de legitimidad de las normas tradicionales responde a diferenciaciones culturales y políticas al interior de la vida diaria que no han resultado todavía en el surgimiento de alternativas estables, la falta de reconocimiento de las instituciones públicas responde, no sólo a su falta de efectividad como se argumenta comúnmente, sino al hecho de que las mismas casi nunca han surgido de procesos participativos reconocidos como válidos y legítimos. Esto vale también para muchas de las instituciones que han surgido en el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz.

El patrón fundamental en la resolución de conflictos, aunque de manera cambiante y renovada, continúa siendo la lógica del garrote, la postura del más fuerte, el machete más largo, la piedra más grande, la pandilla más numerosa, el sindicato más fuerte, la autoridad patronal, la mentalidad de cacique, la autoridad de los principales, el discurso más populista, el partido político más patrimonialista y autoritario, y la patria potestad.

Todos estos ejemplos pueden y, de hecho, han sido explicados a la luz de la economía política del desarrollo y de una teoría sociológica y psicológica que, usualmente, parte de la naturaleza y secuelas de la violencia revolucionaria y contrarrevolucionaria que llegó a su fin formal en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz. Estas son las explicaciones que encontramos, por ejemplo, en los informes nacionales de desarrollo del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, incluido el recientemente publicado informe titulado “Guatemala: Una agenda para el

desarrollo humano”. También es posible encontrar este tipo de explicaciones en muchos de los informes elaborados por MINUGUA, y en muchos reportes de investigación generados por institutos, asociaciones y centros de investigación de Guatemala. Aunque estos informes son valiosísimos en sí mismos y han contribuido muchísimo al entendimiento de la problemática cultural, política y económica en la Guatemala de posguerra, los mismos muchas veces dejan por un lado las consideraciones que aquí nos ocupan.

El autoritarismo tradicional

Como es bien sabido, el autoritarismo tradicional apela, por una parte, a la autoridad positiva del orden y el progreso, al respeto por las autoridades locales y nacionales, la observación de un código de ética que enfatiza la prudencia y las virtudes religiosas, así como una forma de civismo cargado de simbolismo nacionalista. La ausencia de varios de estos términos en el seno de la sociedad contemporánea, se analiza en los términos de la llamada “gobernabilidad”, con seguridad policial y militar como fundamentos de la convivencia política.

Por otro lado, el liderazgo político de los autoritarismos deriva su fuerza moral del carisma caudillista que asume su rol y su destino como resultado de la intervención divina o del destino historicista más allá del juego democrático²¹. Para esta forma de liderazgo político, aunque sea un requerimiento de la institucionalidad electoral, el juego democrático es entendido como inherentemente incierto, inestable, poco confiable y sujeto a la manipulación subversiva y periodística contra el orden, el progreso y la autoridad “legítima” que proviene, sin mediación, de un “pueblo” identificado con su líder.

Lejos de articular una posición política coherente con el proceso de transición democrática y consolidación del Estado de Derecho, el autoritarismo tradicional apela a la “voluntad del pueblo”, supuestamente manifestada de manera directa en un mayoritarismo plebeyo y popular, y a la sabiduría de los caudillos para interpretar dicha voluntad. De hecho, para estas formas de autoritarismo, la dirección normativa del proceso de transición democrática representa una amenaza, una desestabilización, de las relaciones sociales concebidas en los términos de la vieja doctrina militar de la “estabilidad nacional”, ahora traducidas a los términos de la “gobernabilidad democrática.” Por lo tanto, la relación que existe entre el autoritarismo tradicional y los procesos de autoconstitución de la sociedad civil y sus formas autónomas de organización, es una relación de suma cero. Entre más haya de uno menos hay del otro.

Para el autoritarismo tradicional, la lista de problemas culturales, políticos y económicos que enfrenta la República, se reduce a

20 Sobre el proceso de globalización y su impacto en Guatemala, ver Christopher Chase-Dunn, Susanne Jonas y Nelson Amaro, *Globalization on the Ground. Postbellum Guatemalan Democracy and Development*, Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, 2001. Varias partes de este libro son la traducción al inglés, de las ponencias presentadas en una conferencia sobre democracia y desarrollo llevada a cabo en la Universidad del Valle, en marzo de 1998. Yo también he ofrecido algunas reflexiones en torno al impacto de la globalización en Guatemala en mi ponencia “Between Reconstruction and Globalization.”

21 Para un análisis del discurso caudillista en el caso del Sr. Ríos Montt y su partido político, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), ver mi artículo “‘Yo soy Guatemala.’ Un análisis de la candidatura de Efraín Ríos Montt y el discurso que la promueve” en *El Observador Electoral* No. 1, enero 2003, pp. 22-26.

las demandas “populares” que se articulan en los términos tradicionales de la economía moral y, a la par de ello, al manejo moralizante de las instituciones, tal y como éstas están ya diseñadas en la Constitución Política. Si estas instituciones no funcionan como deben, ello se debe, según la tradición autoritaria, a la degeneración moral de una población que ha optado por la bebida, la promiscuidad, el adulterio, la deshonestidad, la mentira, el robo y la criminalidad, etc. La lista de problemas y los discursos diseñados para identificarlos se reducen, pues, a una cuestión de carácter personal, actitud existencial e intuición de caudillo para entender a la población.

La ciudadanía multicultural

Entre el comunitarismo tradicional y el autoritarismo tradicional encontramos varios tipos de movimentismo populista y revolucionario, con sus correspondientes formas partidarias de representación. Al mismo tiempo, la constelación cultural y política en el momento presente, también registra la presencia de una ciudadanía multicultural y democrática que también ha nacido desde los escombros que nos dejó la violencia revolucionaria y contrarrevolucionaria. Por razones de espacio, voy a limitarme a hacer un análisis rápido de la ciudadanía multicultural apuntando, en primer lugar, que lo que hasta hoy había conceptualizado en términos de una “nueva ciudadanía”, puede pensarse mejor, precisamente, en términos de una ciudadanía multicultural²².

La idea de una ciudadanía multicultural ha sido ampliamente discutida por el filósofo político liberal canadiense Will Kymlicka²³.

Su argumento parte del supuesto de que es necesario suplementar los principios tradicionales de los derechos humanos, con una teoría de los derechos de las minorías. Indudablemente, basado en la experiencia federal canadiense y el lugar de Québec, las minorías inmigrantes y los pueblos indígenas, que se autoentienden en Canadá como “naciones originarias”, en esta federación Kymlicka sugiere que una teoría comprensiva de la justicia en un Estado multinacional tiene que incluir, tanto los derechos universales que le son asignados a todos/as los individuos/as, independientemente de sus membresías en grupos o comunidades concretas, así como ciertos derechos diferenciados de grupo o “estatus especiales”, particularmente adaptados para las culturas minoritarias.

A estos últimos, Kymlicka les llama “derechos colectivos”, que no hay que confundirlos con aquellos que legitiman las restricciones internas que los grupos mismos puedan practicar sobre sus propios miembros, sino que consisten en aquellos derechos que erigen “protecciones externas” con respecto de las

decisiones de las mayorías. Específicamente, Kymlicka habla de a) derechos de autogobierno, b) derechos poliétnicos, y c) derechos de representación especial²⁴. El ejercicio, observación e implementación consistente de estos derechos, resulta precisamente en la implementación de una ciudadanía multicultural capaz de cumplir su función integradora y legitimadora en un Estado multinacional como es el Estado federal canadiense. Sin este tipo de “protecciones externas” que hacen posible la ciudadanía multicultural y que sirven de base a la “política multiculturalista,” argumenta Kymlicka, no habría medio alguno para conseguir que estos grupos se sientan parte de la comunidad nacional, y no habría medio alguno para lograr la unidad social que necesitan los Estados multinacionales.

Ahora bien, como ya habíamos visto, en el caso de Rawls y su idea de la “posición original,” el problema con esta concepción liberal de la ciudadanía multicultural, sin embargo, es que la misma está elaborada en términos restringidos de la ciudadanía liberal clásica expandida y diferenciada, como tantas veces insiste Kymlicka, hasta incluir los derechos de las minorías. De igual, la propuesta de Kymlicka refleja de manera esencial la experiencia de población original, dualismo colonial (francés e inglés y las secuelas históricas de la “conquista” de Baja Canadá por Inglaterra en 1763) y varias generaciones de inmigrantes, sobre todo europeos/as y con identidades de grupo muy sólidas. Esta es, pues, una idea de ciudadanía multicultural ya institucionalizada en un Estado cuyos contornos políticos ya están acabados y que a partir de allí, pueden ser diferenciados por medio de reformas a los mecanismos de la representación política. La concepción del sistema de derechos que subyace a la propuesta de Kymlicka los reduce, así, a derechos humanos clásicos con el agregado de derechos colectivos. Uno de los problemas centrales con este argumento, sin embargo, es que pasa por alto los derechos fundamentales que encontramos en la tradición republicana, es decir, los derechos públicos de ciudadanos autoorganizados en grupos y en el contexto de una esfera pública abierta y democrática, y dispuestos a entrar en procesos demandantes y complejos de resolución de sus conflictos²⁵.

Aun así, la idea de una ciudadanía multicultural, entendida como algo más que una simple asignación de derechos colectivos para protección de las minorías, es de extrema importancia y pertinencia en la hora presente de la transición democrática en Guatemala. En otros lugares he afirmado, sin embargo, que la nueva ciudadanía no puede reducirse al movimiento popular o al conjunto de organizaciones no gubernamentales, y que estos últimos tampoco se pueden equiparar a la sociedad civil. En condiciones de pluralismo cultural y transición democrática, el sujeto popular de antaño, así como otras formas de sujeto sustantivo y colectivo, ha dejado de ocupar una posición central dentro de una ciudadanía multicultural que muy lentamente se

22 Ver mi ponencia “Between Reconstruction and Globalization.”

23 Ver Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford: Clarendon Press, 1995. Existe edición española.

24 Kymlicka, op. cit., 27.

25 La noción restringida de ciudadanía que ultimadamente subyace al argumento de Kymlicka, puede encontrarse en su *Multicultural Citizenship*, p. 174 y siguientes.

está transformando a sí misma en comunidad, en sociedad civil, capaz de entenderse a sí misma no sólo como destinataria sino también como autora de su propia identidad y constitución política²⁶.

Lo que yo propongo es una ciudadanía multicultural entendida como una práctica que emerge, tanto de la apropiación moral y ejercicio de los derechos humanos universalistas, como de la posibilidad de escoger y continuar ejerciendo de manera autónoma y en base a capacidades ciudadanas, formas de vida buena enraizadas culturalmente. Esta ciudadanía requiere no sólo de una forma de conciencia moral posconvencional y capaz de asumir una perspectiva reflexiva con respecto de las propias tradiciones, sino la “perspectiva del otro/a” como si fuera la propia y también de un compromiso político con el principio discursivo de formación de la opinión y la voluntad políticas, como principio fundamental de la transición democrática. De acuerdo a este principio, como lo argumenta Habermas, “*válidas son aquellas normas, y sólo aquellas normas, a las que todos los que puedan verse afectados por ellas pudiesen prestar su asentimiento como participantes en discursos racionales*”²⁷. Solo a partir del despliegue práctico y público de este principio discursivo, es posible concebir el surgimiento de una ciudadanía multicultural y no simplemente otorgada de manera paternalista, en forma de derechos colectivos definidos por comunidades de expertos y por políticos de ciudad.

Insisto, sólo la apropiación moral y el despliegue práctico de este principio garantiza el surgimiento de una ciudadanía de “doble código”, es decir, una ciudadanía con un pie en la universalidad de los derechos humanos y otro en la particularidad de los mundos de la vida que la gente, de manera democrática y también mediada por el principio discursivo, decida continuar y reproducir²⁸. Sólo en la medida en la cual se de inicio y sustento a una nueva forma de integración social, basada en un nuevo lenguaje cultural y político que nos ayude a mediar la dialéctica entre universalismo y comunitarismo, y entre nacionalismo y republicanismo democrático, una dialéctica fundamental de la transición democrática guatemalteca, será posible dar pasos consistentes y sin conciencia moral falsa hacia la solución de los problemas propios de la institucionalidad del multiculturalismo y el Estado de derecho, cuyas líneas generales están solamente esbozadas en los Acuerdos de Paz y las propuestas del Pacto Fiscal²⁹.

Esta ciudadanía multicultural reviste varias formas concretas en Guatemala, incluyendo el neocomunitarismo, el activismo de derechos humanos, el activismo feminista y el activismo ambientalista. Ofrezco estos ejemplos solo como ilustración y no como un catálogo perfecto y completo de todas las formas nuevas de política democrática que han surgido en Guatemala. De hecho, la lista es mucho más amplia, aunque no tan amplia como sería deseable³⁰.

Aunque no hay espacio aquí para elaborar la discusión sobre el mismo, el caso del neocomunitarismo es muy interesante. Esta forma de lenguaje cultural y político también surgió en Guatemala en las últimas dos décadas, sobre la base de la apropiación moral del lenguaje de los derechos humanos universalistas y la modernidad, así como de una actitud crítica y reflexiva en defensa de las tradiciones comunitarias³¹.

C. Obstáculos en el camino hacia la ciudadanía multicultural

No hay duda de que la crisis de la eticidad tradicional se ve exacerbada por crisis socio-económicas y disfuncionalidades políticas de origen local o internacional. No sólo se encuentran muchos/as individuos en el espacio anómico intermedio entre una ética tradicional y una moral moderna, sino que los/as mismos/as tienen que enfrentar las crisis estructurales propias del capitalismo periférico y del Estado-nación, con capacidad de maniobra social sustancialmente disminuida por el avance del neoliberalismo y del proceso globalizador. Las ambivalencias de estas múltiples dimensiones del momento presente en la República, se debaten en la subjetividad de muchos/as individuo/a que componen Guatemala, aunque los términos de dicho debate no le sean claros a la gente misma y no sean generalmente compartidos. Estas ambivalencias constituyen obstáculos subjetivos serios contra el desarrollo de una conciencia moral adecuada para la vida en democracia y, no digamos, para el desarrollo de debates serios en el contexto electoral donde apenas si hay tiempo para transmitir estereotipos.

Por otra parte, los/as pocos/as individuos/as que, como resultado de procesos de aprendizaje lentos, dolorosos y prolongados, han logrado desarrollar una identidad ciudadana y una moral posconvencional que busca socializarse, estabilizarse y legitimarse en los procesos democráticos de una nueva República,

26 Ver mi artículo “El rol de la ciudadanía en la transición guatemalteca a formas democráticas de política” en *Con-ciencia Política* 1, No. 1, pp. 227-266. Revista especializada en Ciencia Política, publicada por el Colegio de Veracruz de México.

27 Habermas, *Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso*, 2da. Edición, Madrid: Editorial Trotta, 2000, p. 172.

28 Para una discusión de la idea del “doble código” de la ciudadanía, ver Habermas, *La inclusión del otro*, pp. 87-91. Ver también mi tesis doctoral, *The Language of Human Rights in the Guatemalan Transition to Democracy*, Toronto: York University, 2000, 175-209.

29 Para un análisis de las propuestas del Pacto Fiscal, ver Nuria Gamboa M. y Barbara Trentavizi, *La Guatemala posible. La senda del pacto fiscal*, Guatemala: Asociación Centroamericana Hombres de Maiz, 2001.

30 Para un análisis más detallado del proceso de aprendizaje existencial y político, lento y doloroso, por el que ha atravesado Rigoberta Menchú Tum, ver mi trabajo “The Transformation of the Guatemalan Public Sphere: 1950s to the 1990s,” en *Social Politics* 3, No. 2, verano de 1998, pp. 188-213. Revista de estudios internacionales de género, Estado y sociedad publicada por la Editorial de la Universidad de Oxford.

31 Sobre la herencia que nos ha dejado a todos/as el universalismo de la modernidad, ver el trabajo de Habermas, *El discurso filosófico de la modernidad*, Madrid: Tauros, 1989. Sobre el comunitarismo como una fuente fundamental del ser individual y colectivo moderno, ver Charles Taylor, *Sources of the Self. The Making of the Modern Identity*, Cambridge: Harvard University Press, 1989. Para un análisis comparativo y crítico de estas dos tradiciones importantísimas en la filosofía política internacional contemporánea, ver David Rasmussen (Coordinador), *Universalism vs. Communitarianism. Contemporary Debates in Ethics*, Cambridge: MIT Press, 1990.

y no sobre bases sustantivas étnicas, religiosas o culturales como lo prescribe un editorial reciente de Prensa Libre, estuvieran nadando contra la corriente³². Las luchas de esta ciudadanía multicultural no son, pues, sólo contra las huestes retrógradas del autoritarismo tradicional de Guatemala; tampoco son luchas exclusivas en contra de las tendencias oligárquicas del sector privado y sus representantes y/o aliados en los partidos políticos, en la esfera pública y en la arena internacional. Tampoco son luchas sólo contra un sistema económico injusto y profundamente desigual. Y tampoco son luchas sólo contra una opinión pública matizada por medios de comunicación masivos que todavía emplean lenguajes periodísticos propios del mundo urbano premoderno³³.

Es cierto que estos son adversarios formidables, pero no son “el” adversario más formidable. El adversario más formidable de la ciudadanía multicultural se encuentra en la vida cotidiana de la mayor parte de la población, en la propia subjetividad de una ciudadanía todavía ambivalente, todavía atada de modo convencional e irreflexivo al pasado y todavía sujeta a los tabúes de la tradición y la convención. Pero también de una ciudadanía que tampoco puede anclarse en instituciones correspondientes debido al retraso, las ambivalencias y las contradicciones en el proceso de transición democrática.

Hay una tendencia fuerte a explicar el déficit normativo que aquí nos ocupa, por los niveles de pobreza y pobreza extrema que afectan a la mayoría de la población guatemalteca. En efecto, si entendemos la condición de clase en términos de ocupación, ingreso y educación, como lo hacen muchos/as teóricos/as sociales latinoamericanistas, entonces sí se puede hacer una correlación entre la pobreza, también entendida como falta de capacidades y oportunidades, y la continuidad de formas tradicionales de vida o la posibilidad de construir instituciones democráticas estables y efectivas.

Si traducimos esta continuidad de formas de vida tradicionales a los niveles de apoyo a la democracia entre gente pobre, “*el ingreso parece ser más importante que la educación para explicar (...) los niveles de apoyo a la democracia*”³⁴. Es posible pues establecer una correlación entre estas variables y la presencia de una conciencia moral adecuada para formas democráticas de política. En general “*entre más elevado sea el nivel de ingreso y el nivel de educación, los/as individuos/as son más prodemocráticos*”³⁵.

Debido a los niveles crecientemente crónicos de pobreza en Guatemala, no es de sorprenderse, entonces, que la gente común tienda a esperar de los partidos políticos y del Estado mismo, una mejoría sustancial en sus niveles de ingreso, en su situación de empleo y en su educación. Desde esta óptica, entonces, la continuidad de formas tradicionales de vida y de economía moral podría explicarse de modo instrumental y estratégico, es decir, como una forma racional y pragmática de comportamiento colectivo por parte de los/as desposeídos/as, y una forma de estrategia de supervivencia de culturas oprimidas y grupos de explotados/as.

Es cierto, en Guatemala como en el resto de Latinoamérica, quizás con excepción de Costa Rica, formas democráticas de política generalmente se extienden hacia las formas de organización económica, y la democracia, por tanto, es generalmente entendida como un mecanismo institucional que debería servir para corregir las desigualdades y distorsiones del sistema económico y los mercados. En cuanto a esta concepción de la democracia, el caso guatemalteco es similar a otros casos latinoamericanos. Como lo argumenta Roderic Ai Camp, “*la mayoría de latinoamericanos/as definen sus expectativas democráticas en los términos socioeconómicos de la igualdad y el progreso*”³⁶. En varios países de la región, entonces, la democracia se entiende más como mecanismo asegurador de la igualdad económica y la seguridad social, que como mecanismo para el procesamiento de los derechos políticos y su despliegue exclusivo, en función de la formación de la opinión y la voluntad políticas en la esfera pública y el sistema político institucional.

Estas actitudes también influyen en cómo la gente común percibe tanto el rol de instituciones públicas particulares: Ejecutivo, ministerios, secretarías, fondos nacionales, entidades autónomas o semiautónomas, y sistemas de servicio, así como del Estado en general y, de igual modo, el papel de los mercados, los sectores privados y las compañías nacionales y transnacionales. Si bien el neoliberalismo ha avanzado en algunos países, es incorrecto creer que el mismo no ha avanzado tanto como debería, debido a Estados corruptos y sectores privados acostumbrados al mercantilismo y a los monopolios.

Más poderoso que los Estados corruptos o clientelistas en frenar el avance del neoliberalismo, ha sido una cultura política que no parece ser terreno fértil para una concepción de la democracia y los mercados como expresión de esferas diferenciadas y

32 De acuerdo al editorial de Prensa Libre del día 26 de agosto de 2003, la “unidad” de los indígenas sólo puede darse si se hacen a un lado “*las diferencias que existen entre las distintas etnias, por cualquier razón, y sobre todo tener en cuenta que, el vínculo racial es el superior, y está por encima de los aspectos políticos, religiosos, sociales, económicos, etcétera.*” Es exactamente este tipo de versiones sustancialistas y colectivistas de la unidad cultural y política, las que representan un obstáculo para el desarrollo de una ciudadanía multicultural y un Estado democrático de derecho.

33 No es ni casualidad ni simple ignorancia periodística que la prensa escrita guatemalteca siga empleando términos como “nosocomios” para referirse a hospitales, “vecinos” o “comuneros” para referirse a ciudadanos, “mingitorios” para referirse a baños públicos, “inconformes” para referirse a manifestantes, “labriegos” para referirse a agricultores pequeños, “patrones” para referirse a empleadores, “El General” para referirse a un militar retirado que, aunque la prensa no lo intente, perpetua su caudillismo por medio del uso de este título que no le corresponde. No hay duda de que la prensa escrita guatemalteca, si quiere contribuir al desarrollo de formas democráticas de política, tiene la necesidad de una renovación urgente de sus vocabularios y estilos periodísticos. El solo hecho de publicar noticias, por muy importantes que ellas sean, no hace de la prensa escrita un pilar de la democracia. Después de todo, el uso de la libertad de expresión puede muy bien resultar en la distorsión de la comunicación social y en un freno al desarrollo cultural y político.

34 Roderic Ai Camp (ed.), *Citizen Views of Democracy in Latin America*, Pittsburgh: University of Pittsburg Press, 2001, p. 12.

35 Ibidem.

36 Camp (ed.), op. cit., p. 17.

funcionalmente especializadas de la acción social. Por supuesto, el carácter agresivo e ideológicamente dogmático que revisten las formas de política y las políticas públicas inspiradas por el llamado “Consenso de Washington”, y el actual proceso librecambista y globalizador impulsado y dirigido desde las metrópolis económicas y las empresas transnacionales, no han ayudado para nada a la causa neoliberal.

De hecho, el obstáculo más grande al neoliberalismo en Guatemala es el entendimiento peculiar que la gente tiene de la democracia. De acuerdo a este entendimiento, la democracia no se entiende como democracia si la misma no es democracia social. Este vínculo entre democracia y desarrollo o entre derechos políticos y derechos sociales, revela un vínculo más profundo entre desarrollo político y desarrollo social.

La falta de equilibrio entre estos dos polos mutuamente dependientes de la vida social, conduce al cuestionamiento tanto de una liberalización económica sin justicia social como al reclamo de justicia social sin respeto a los derechos privados, que también son parte de los derechos humanos entendidos en forma moderna. Esa falta de equilibrio también genera formas de discurso y organización política encaminados hacia un supuesto acercamiento y reconciliación entre un Estado que, en el nuevo contexto globalizador, todavía pretende cumplir tareas sociales y una población que, aunque altamente alienada del mismo, sin embargo continúa esperando un Estado paternalista, interventor y desarrollista.

Y hay razón cuando se vincula la pobreza con la falta de desarrollo de formas democráticas de política. Sen ya nos ha recordado que no se trata simplemente de que la gente pobre no tenga, y que en una sociedad bien ordenada debiera tener, acceso a bienes y servicios primarios, como lo argumenta Rawls, sino, más bien, de que las personas sin las capacidades necesarias podrían, incluso, no disfrutar adecuadamente y obtener mucho menos del acceso a bienes y servicios primarios, si es que tuviera acceso a los mismos, independientemente de cual sea el contexto cultural y político que le de significado a éstos últimos³⁷.

En su ensayo reciente titulado *La constelación posnacional*, Habermas ha puesto este argumento del siguiente modo:

*A largo plazo, sólo un proceso democrático que procure un adecuado y justo reparto de derechos, puede ser considerado como legítimo y producir solidaridad. Para permanecer como una fuente de solidaridad social, el estatuto de ciudadano debe conservar un valor de uso que se traduce en un efectivo ejercicio de los derechos sociales, ecológicos y culturales*³⁸.

En Guatemala, este argumento ha sido avanzado por columnistas

como Adrián Zapata. Por ejemplo, Zapata escribió recientemente:

*Pero pongamos los pies sobre la tierra. Para más del 50% de la población que vive en la pobreza y casi una cuarta parte que sobrevive en la extrema pobreza, la formalidad democrática le dice muy poco. Su hambre ancestral no se calma con ir a marcar el 9 de noviembre cinco papeletas que ni siquiera logra entender a cabalidad para qué sirve cada una de ellas. Su miseria no mejora con que los entacuchados defensores de derechos humanos, logren triunfar en su justa lucha por defender una institucionalidad que para ellos ha estado completamente ausente de su precaria existencia cotidiana*³⁹.

Zapata continúa:

Es digna de reconocimiento la lucha por rescatar la formalidad democrática, entendida en su dimensión procedimental, pero no es justificable renunciar al objetivo inaplazable de darle contenido económico, social y cultural a la democracia, sin reducirla únicamente a esa dimensión política. Esta renuncia equivale a conformarse con ser el vagón trasero de un tren conducido por la locomotora empresarial.

Ahora bien, aunque argumentos de columnistas como Zapata son, hasta cierto punto, socioeconómica y políticamente correctos, los mismos pueden estar fundados en premisas que es necesario examinar cuidadosamente. Es de hecho posible detectar en los argumentos particulares de Zapata, un paradigma productivista del desarrollo y la democracia que divide a ésta última, como tradicionalmente lo ha hecho el materialismo histórico ortodoxo, en una democracia formal, confundida con una democracia procedimental, y una social y económica⁴⁰. Y el problema con este argumento, entre otros, es que ignora los vínculos normativos que existen entre formas de vida democratizadas, mundos de vida diferenciados, formas de coordinación y estabilización legítimas y prácticas autolegislativas basadas en un sistema de derechos humanos, políticos y sociales que se para o se cae dependiendo de los problemas que tenga uno de estos polos. También ignora que la pobreza no consiste solamente en la falta de acceso a bienes y servicios primarios sino también, y de manera mas fundamental, en la falta de capacidades morales y materiales para escoger estilos de vida, formas de uso de los bienes y servicios, y modo de ejercer lo que Habermas llama “el valor de uso” de los derechos humanos y políticos.

El estatuto de ciudadano/a y las capacidades que le son peculiares está fundado sobre un mundo cotidiano diferenciado, racionalizado, modernizado y asumido de modo crítico y reflexivo. Esta cualidad crítica y reflexiva que sólo pueden

37 Sen, *Inequality Reexamined*, p. 83.

38 Jürgen Habermas, *La constelación posnacional. Ensayos políticos*, Barcelona: Paidós, 2000, p. 104.

39 Prensa Libre en línea, 28 agosto de 2003.

40 Para una discusión muy relevante sobre la democracia procedimental, y por qué no se la puede reducir a una democracia formal, ver Simona Chambers, *Reasonable Democracy. Jürgen Habermas and the Politics of Discourse*, Ithaca: Cornell University Press, 1996.

ejercerla los/as individuos/as en la intimidad de su vida subjetiva y privada, y sobre esa base, luego, en la esfera pública, sólo surge de procesos de diferenciación sociocultural que permiten la separación, y el examen por separado, de la individualidad, la cultura y la sociedad, y sobre esa base, luego, influir la intimidad de la vida diaria. En la medida en la cual, estas dimensiones de la cotidianidad permanezcan unidas y aglutinadas en cosmovisiones tradicionales, religiosas, patriarcales y convencionales, y en la medida en la cual el mundo de la pobreza continúe perpetuándose y expandiéndose, no podrán surgir formas críticas y reflexivas de conciencia moral individual o discursos ético-políticos basados en una apropiación crítica de la condición de género, de etnia, de clase, de estatus o de edad.

D. El rol de la sociedad civil y los partidos políticos

Como señalé al principio de este artículo, los problemas apremiantes de pobreza, analfabetismo, insalubridad, desempleo, subempleo e informalidad, falta de vivienda, crisis en el sistema de salud y crisis en el modelo económico agroexportador, ejemplificada por la crisis en la producción y exportación del café, entre otros productos, que han sido complementados por problemas nuevos de seguridad, corrupción masiva, crimen organizado, narcoactividad, secuestros, robos de imágenes religiosas, linchamientos e impunidad en esferas cada vez más amplias y a escalas sin precedentes, no están alcanzando la agenda partidaria. En lugar de ello, los partidos políticos están hablando de “unidad nacional,” de “gobiernos duros y no blandos,” de obras públicas claramente articuladas en términos paternalistas y clientelistas, y de proyectos de desarrollo de varios tipos, contruidos a partir de concepciones estereotipadas del desarrollo que hoy se encuentran de moda en la esfera pública guatemalteca.

Es posible e importante entender a los partidos políticos a partir de las características generales de la institucionalidad electoral en Guatemala, tal y como lo ha propuesto mi amigo Raúl Cuellar en las páginas de este boletín. Yo estoy menos convencido, sin embargo, de que se pueda seguir entendiendo a los partidos políticos en términos de una representación de clase o fracciones de clase, especialmente si se concibe dicha representación en los términos tradicionales del análisis del poder que en los años setentas utilizaran teóricos como Ralph Miliband y Nicos Poulantzas, y que propusieron en Latinoamérica analistas como Marta Harnecker y que todavía continúan utilizando algunos/as analistas en Guatemala.

En lugar de ello, yo propongo entender a los partidos políticos a partir de una teoría del poder que pone el énfasis en lo que Axel Honeth llama la “gramática moral de los conflictos sociales”, es decir, los múltiples lenguajes culturales y políticos y las múltiples estrategias de entendimiento y reconocimiento mutuo, así como sus correspondientes formas de práctica y estrategia⁴¹. Y es posible distinguir patrones tradicionales así como novedades que han surgido en la República desde la Primavera Democrática hasta el presente⁴². Esta propuesta está basada en la idea de que, bajo las condiciones del pluralismo cultural e ideológico, crisis en las formas de eticidad tradicional así como un profundo impasse en el proceso de transición democrática e implementación de los Acuerdos de Paz, las nociones tradicionales de “derecha,” “izquierda” y “centro político”, bien parecen estar exhaustas.

Existen buenas razones para que el paradigma de análisis cultural y político en las transiciones democráticas de Latinoamérica y en los procesos electorales, incluyendo la versión guatemalteca, esté pasando pues de un énfasis en el rol que sujetos colectivos tradicionales como los partidos políticos, las clases sociales así como también los viejos movimientos revolucionarios y populares de base, juegan en la transición democrática hacia una comprensión crítica, es decir, una comprensión de las condiciones que hacen posible, y cada vez mas detallada de la gramática moral de los conflictos culturales y políticos que ocurren dentro de la sociedad civil, y la relación de ésta con liderazgos políticos que aspiran su representación en la institucionalidad política y en el Estado⁴³. En Guatemala este cambio de paradigma analítico aún no ha tenido el impacto que yo creo debería de estar teniendo.

Aunque es cierto que la sociedad civil, entendida como una esfera social autónoma del Estado, tiene sus raíces en los inicios de la vida republicana europea, la misma es no sólo una construcción social moderna, sino que relativamente reciente y desigual en Latinoamérica. En el caso de Guatemala, yo he argumentado que la misma no puede encontrarse antes de mediados de los años ochentas, aunque sí sea posible encontrar fragmentos aislados de la misma con anterioridad. Lo que le dio impulso al desarrollo de la sociedad civil en Guatemala, sin embargo, fueron los efectos combinados del Estado de Seguridad Nacional que se instauró a partir de 1965, la guerra revolucionaria y contrarrevolucionaria que se desató desde los sesentas y que se

41 Entre las fuentes teóricas principales que nos presentan esta nueva forma de analizar y entender el quehacer político, tanto informal como institucional, encontramos a Axel Honeth, *The Critique of Power. Reflective Stages in a Critical Social Theory*, Cambridge: MIT, 1991 y su *The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts*, Cambridge, Inglaterra: Polity Press, 1995.

42 Para un análisis histórico de los partidos políticos y de la institucionalidad electoral en Guatemala, ver Raúl Cuellar, “Institucionalidad electoral y política guatemalteca,” Primera parte, *El Observador Electoral* No. 2, abril 2003, pp. 1-11; “Institucionalidad electoral y política guatemalteca,” Segunda parte, *El Observador Electoral* No. 3, agosto 2003, pp. 29-36; ver también “Partidos políticos e institucionalidad electoral,” Primera parte, *El Observador Electoral*, ibid., pp. 2-16.

43 En Latinoamérica, este cambio de paradigma está en parte ejemplificado por el trabajo reciente de Aldo Panfichi (Coordinador), *Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono sur*, México: Fondo de Cultura Económica y Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002. Ver también el trabajo de Alberto J. Olvera (Coordinador), *Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: México*, México: Fondo de Cultura Económica, 2003; y, para el caso de Brasil, Evelina Dagnino (Coordinadora), *Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Brasil*, México: Fondo de Cultura Económica, 2002.

extendió hasta fines de los ochentas, la transición democrática muy problemática y contradictoria que se inició en 1986, los primeros pasos que los gobiernos civiles dieron hacia transformaciones económicas neoliberales y, finalmente, los procesos de negociaciones de paz que se iniciaron con Contadora y Esquipulas y que, eventualmente, desembocarían en las negociaciones de paz en Guatemala.

Aparte del desarrollo todavía embrionario y excepcional de una conciencia moral posconvencional y una forma de ciudadanía multicultural, otros elementos que caracterizan el surgimiento de la sociedad civil, y no solo en Guatemala, son *“la transformación de modos tradicionales de organización y acción colectiva basados en criterios corporativos o de clase, el declive de partidos políticos e ideologías políticas convencionales, y la expansión de nuevos tipos de asociación civil que se asientan en problemáticas particulares propias del agudo proceso de fragmentación social y política vivido en los últimos años”*⁴⁴.

Si bien la sociedad civil guatemalteca, como otras comunidades civiles latinoamericanas, continúa exhibiendo una exagerada concentración en sus relaciones con el Estado, y si bien su proceso de autoconstitución ha respondido a un “proceso accidentado de aprendizaje”, en donde *“todavía existen prácticas autoritarias, clientelistas y renuentes al pluralismo”*⁴⁵, el modelo de política democrática que nos ofrece incluso una sociedad civil precaria como ésta, representa el mejor modelo que tenemos para consolidar la transición democrática, implementar cambios sociales necesarios a partir de los Acuerdos de Paz y el Pacto Fiscal, y convertir el Estado democrático de derecho, de un ideal a una práctica cotidiana de buen gobierno.

El argumento que yo quiero avanzar en este contexto es el siguiente.

El proceso de transición democrática en Guatemala parece demostrar que el desarrollo y consolidación de una conciencia moral posconvencional, de una ciudadanía multicultural y de una sociedad civil autónoma y estable, está en relación inversamente proporcional con el mantenimiento de una institucionalidad electoral y política que responda a modelos tradicionales o puramente estratégicos de organización, representación y legitimidad.

Este argumento es también aplicable a un proceso de implementación de los Acuerdos de Paz y construcción de una

institucionalidad de la paz y la convivencia pacífica, siempre y cuando estos procesos estén hegemonizados por actores orientados estratégicamente⁴⁶. El consenso general que existe en torno a la transición democrática, la implementación de los Acuerdos de Paz y el desarrollo humano en Guatemala, como puede verse expresado en las posiciones “consensuadas” del Grupo Consultivo, parece estar apostando el futuro de Guatemala en un “proyecto de Nación” para la República que descansa precisamente en el perfeccionamiento del modelo tradicional de organización, representación y legitimidad en donde, aunque se supone que la sociedad civil tiene que jugar un cierto rol, son los partidos políticos lo que continúan jugando un papel protagónico, vanguardista y hegemónico en la transición democrática. Y esto está ocurriendo, como lo afirmé más arriba, justo en el momento, un momento que ya lleva veinte años, en que los partidos políticos atraviesan por su crisis muy seria, quizás irreversible, de representación, organización y legitimación. Por razones de espacio, en lo que sigue voy plantear solamente algunos elementos en torno a la problemática de la representación en el momento presente.

A nadie en Guatemala escapa el hecho de que, por muy variada que sean las organizaciones partidarias, las mismas no son representativas de la sociedad. El modelo de representación que encontramos en las organizaciones partidarias de Guatemala, es un modelo fundamentalmente elitista, patriarcal y mayoritarista.

Por años y desde la experiencia de muchos grupos y segmentos sociales tradicionalmente excluidos, se ha venido demandando que los partidos políticos cambien su modelo de representación y que tomen en cuenta la voz de estos grupos y segmentos, incluyendo la voz de las mujeres, no sólo en su forma de organización interna, sino también en el diseño de sus plataformas políticas.

Por años, también, líderes de comunidades indígenas, movimientos populares y organizaciones de mujeres han venido argumentando que, independientemente de cuanto le importe o se interesen los liderazgos políticos tradicionales por la problemática de los/as excluidos, lo que en Guatemala, por cierto, no ha ocurrido mucho, de ninguna manera pueden entender esa experiencia precisamente porque no han experimentado la exclusión en carne propia y/o en los términos específicos de la discriminación racista, la opresión de género y la explotación de clase. Y este argumento tiene muchísima justificación cuando se recuerda que los liderazgos políticos tradicionales en

44 En Guatemala algo curioso parece estar ocurriendo con la idea de sociedad civil, a saber, que se la está filtrando por medio de estrategias analíticas de corte “científico social”, que pretenden no sólo poner la idea de sociedad civil en su sitio históricamente correcto, sino también en prevenirnos en contra de su “vulgarización.” Al final de cuentas, la idea de sociedad civil que surge de estos análisis “científicos sociales” es una idea vaciada de sus especificidades normativas y ultimadamente equiparada a la idea de una sociedad política inclusiva e incluso abierta. Para un ejemplo de esto ver Edelberto Torres-Rivas, “Usos y abusos del concepto de sociedad civil,” *Diálogo* (publicación mensual de FLACSO-Guatemala), Nueva época, No. 3, abril 2001, pp. 1-6.

45 *Ibid.*, p. 42.

46 Para una discusión más detallada de los paradigmas de negociación y resolución de conflictos que prevalecieron, fundamentalmente y en detrimento de la política democrática y las propuestas de la sociedad civil durante las negociaciones de paz, ver mi contribución “Paradigms of Negotiation and Democratization in Guatemala” en Liisa L. North y Alan B. Simmons (Coordinadores), *Journeys of Fear. Refugee Return and National Transformation in Guatemala*, Montreal y Kingston: McGill-Queen’s University Press, 1999, pp. 57-73.

Guatemala se han forjado, en general, a partir de monólogos culturales y políticos asumidos como no contradictorios, y sin nunca poner al riesgo este presupuesto en procesos de argumentación prácticos, abiertos e inclusivos.

Aunque en Guatemala no se ha hablado mucho del modelo de espejo de representación, es decir, el modelo según el cual, tanto los partidos políticos como los/as funcionarios electos deberían “reflejar” fielmente la composición étnica, de género y de clase de la población, el temor a este tipo de representación ha sido, sin embargo, obvio. Ese modelo de representación implicaría no sólo una amenaza a la hegemonía tradicional de los ladinos de clase media y alta, a los hombres y a los políticos de la Ciudad Capital, sino también, más profundamente, al sistema electoral “representativo”, tal y como este está diseñado en la Constitución Política de la República y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos⁴⁷.

El problema con el modelo espejo de la representación, sin embargo, es que el mismo soslaya el hecho de que la idea de representación, así como sus formas prácticas, se forjan a partir de la adopción de lenguajes culturales y políticos y, para usar el lenguaje de Honneth, una “gramática moral” muchas veces compartidos en común entre elites y clientelas políticas. Es precisamente por esto que partidos políticos de corte patrimonialista y autoritario han sabido, sin embargo, como entrarle al comunitarismo tradicional y al movimentismo popular, y encontrar apoyo dentro de las comunidades indígenas del altiplano y movimientos populares, barriales, urbanos. Lo mismo se puede decir de partidos políticos autoritarios enraizados, si es que no prisioneros, de formas preindustriales y hasta premodernas de economía moral a la que saben utilizar y responder en tiempos de elección.

Finalmente, la izquierda tradicional guatemalteca ha estado tradicionalmente vinculada con la tradición colectivista y movimentista de sectores cuyo autoentendimiento ha estado enraizado en la experiencia concreta de sectores altamente explotados en la sociedad guatemalteca, sobre todo los sectores artesanales, agrícolas, obreros y populares tradicionales. De manera, pues, que aquí la representación política se ha entendido a partir de una mancomunidad de lenguajes culturales y políticos y de un vanguardismo político e ideológico que supuestamente permiten alcanzar entendimientos básicos entre elites y clientelas, liderazgos políticos tradicionales y formas de organización política orgánicas y/o colectivistas. Este parece ser parte del marco normativo que continua justificando en el presente momento electoral las estrategias discursivas y prácticas de partidos políticos como la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y los posicionamientos hegemónicos de sus distintas corrientes así como sus divisiones internas y,

consecuentemente, la fragmentación de sus bases sociales.

El desarrollo de formas alternativas de lenguaje cultural y político y de formas innovadoras de lucha social, específicamente el desarrollo del lenguaje de los derechos humanos, luchas por la autonomía, autoconstitución cultural y política y una ciudadanía multicultural, así como su énfasis en la lucha por el Estado democrático de derecho, ha puesto en jaque al universo discursivo tradicional de la representación partidaria en sus formas tanto derechistas como izquierdistas.

El lenguaje de los derechos humanos hace posible pensar y argumentar que no hay y no debe haber representación legítima si no hay procesos prácticos y autónomos de autoconstitución política y procesos discursivos de formación de la voluntad y la opinión cultural y política. Y estos últimos sólo se pueden dar si la gente tiene la capacidad moral y material de entenderse y de vivir como ciudadanos/as, de trasladar de la experiencia a la propuesta, la lista de problemas que consideren mas apremiantes y la lista de bienes y servicios primarios que consideren prioritarios, de darse a sí mismos los tipos de organización que crean mas adecuados para resolver sus conflictos y de percibirse no sólo como destinatarios eventuales de las normas que nos han de regir en común, sino, de hecho, como autores de las mismas. Y es precisamente este tipo de entendimiento cultural y político el que también ha dado lugar al surgimiento de formas novedosas, autónomas y legítimas de organización y representación, más allá de los partidos políticos.

Lo que he intentado hacer hasta aquí es ofrecer un argumento de por qué los partidos políticos no pueden y, aun si técnicamente lo pudieran hacer, rehusan en traducir problemas centrales de la transición democrática en agenda partidaria y, al mismo tiempo y de modo aparentemente paradójico, grandes grupos de gente, aunque no necesariamente grupos mayoritarios, se vuelcan a favor de las ofertas políticas minimalistas de los partidos políticos. De manera un tanto extensa he argumentado que esto se debe a la existencia de un denominador normativo común entre partidos políticos organizados de modo tradicional y lenguajes culturales y políticos como el comunitarismo tradicional y la economía moral de las plebes urbanas.

El argumento con que inicié este artículo, a saber, que la crisis de mediación que existe en el sistema partidario guatemalteco y que se está volviendo dolorosamente tangible en la presente campaña electoral, surge de un déficit normativo en la vida cultural y política de Guatemala, a saber, por la ausencia de una ciudadanía multicultural reunida en una comunidad democrática capaz de conformarse a sí misma en medio político para el cambio social y con capacidad de acción para intervenir en los problemas mas apremiantes que aquejan a la República en la etapa presente

47 Para una discusión del modelo de espejo de la representación y sus implicaciones para la concepción tradicional de las democracias electorales, ver Kymlicka, *Multicultural Citizenship*, p. 138 y siguientes.

de la transición democrática.

Debido a esta ausencia, los liderazgos políticos dan expresión al resurgimiento de prácticas caudillistas, populistas y clientelísticas que se enraízan, tanto en formas tradicionales de comunitarismo como en formas convencionales de economía moral plebeya. He intentado demostrar cómo estos polos culturales y políticos, no sólo se complementan sino que también dan expresión, ante la sociedad civil y la comunidad internacional, a una falsa conciencia moral.

Ante estos problemas del momento presente, los que incluyen a los partidos políticos mismos como problema, la sociedad civil tiene un reto muy claro. El reto electoral que se le plantea a la sociedad civil puede dividirse en cuatro frentes distintos.

Primero, diseminar el lenguaje cultural y político que le es propio, expandir los procesos y espacios autónomos de formación y capacitación ciudadana, consolidar y defender la esfera pública democrática, definir, diseminar y proponer una lista de problemas, bienes y servicios primarios para que los mismos obtengan un carácter público, moral y políticamente vinculantes y de relativizar y fiscalizar la práctica de las organizaciones políticas que, por razones de constitucionalidad política tradicional y no por “voluntad popular,” todavía disfrutan del monopolio de la mediación de intereses entre “la sociedad” y el Estado.

Segundo, ante la continuidad de formas comunitaristas, movimentistas y autoritaristas de lenguaje cultural y político, la sociedad civil tiene el reto de presentar sus ideas y propuestas no con la expectativa de que las mismas son evidentemente correctas, sino con el afán de demostrar, por medio de los argumentos y los debates, que las mismas son quizás las mas adecuadas para el momento presente de la transición democrática en la República. Ante los hechos indiscutibles del pluralismo cultural e ideológico, la sociedad civil tiene que consolidar las prácticas de una ciudadanía multicultural que, al mismo tiempo que se define a partir del universalismo de los derechos humanos, también se enraíza en los mundos vitales de comunidades en procesos de reconstrucción.

Tercero, ante las tendencias restauradoras del pasado autoritario y represivo, incrustadas no sólo en las instituciones del Estado sino también en la sociedad, la sociedad civil tiene que conjugar la resistencia civil pacífica con una lucha sin fronteras contra la impunidad. Esto significa que, tal y como ha venido dándose recientemente, la sociedad civil tiene que continuar

entendiéndose y desplegándose como parte de una mancomunidad ciudadana que trasciende las fronteras del Estado nacionalista. El momento electoral hace más evidente que nunca, la necesidad de vincular las luchas por el Estado democrático de derecho con luchas similares a nivel internacional.

Y, finalmente, ante la amenaza formidable que representa el neoliberalismo y la globalización para estos procesos de construcción de la ciudadanía multicultural y del Estado democrático de derecho, la sociedad civil debe responder, no en los términos tradicionales de un “proyecto de Nación”, cuyos presupuestos normativos y materiales ya están exhaustos, sino en los términos de un proyecto democrático republicano que se plantee la consolidación del Estado democrático de derecho, con una agenda social decisivamente inclusiva y redistributiva. Si los liderazgos políticos democráticos que están apelando por el voto de la sociedad civil quieren poner un pie en el futuro, su futuro está de cara a la sociedad civil democrática y no a formas tradicionales de Estado y de institucionalidad política.



El proyecto “**Voz, Voto y Desarrollo Local**”, invita a periodistas, comunicadores y medios de comunicación a participar en:

“VOCES por la DEMOCRACIA” Concurso periodístico en torno a las elecciones municipales

Los trabajos participantes deben ser difundidos en alguno de los 39 municipios de cobertura del concurso, entre el 1 de junio y el 7 de noviembre de 2003 y en uno de los siguientes idiomas: mam, k'iche', kaqchikel, q'eqchi', achi' o español. Los premios establecidos son:

Categoría	Premio
Primer lugar de radio	US\$ 1,200.00
Segundo lugar de radio	US\$ 800.00
Primer lugar de televisión	US\$ 1,200.00
Primer lugar de prensa escrita	US\$ 1,200.00
Mejor trabajo en cada idioma maya	US\$ 300.00

Las bases completas del concurso están publicadas en la dirección: www.incep.org/votoc/concurso.html

También puede solicitar las bases o cualquier información adicional, en los teléfonos **611 6055 y 318 0342**, o al correo electrónico: concurso@intelnett.com

El concurso cuenta con el respaldo de AGAAI, ANAM, Cooperazione Italiana, FIJ, MS Dinamarca, OEA, UNESCO y USAID.